

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL

Sala : Primera de Decisión

Magistrado Ponente : CR. JOSÉ ABRAHAM LÓPEZ PARADA

Radicación : 159912 XVI -125 -PNC

Procedencia : Juzgado 167 de Instrucción
Penal Militar y Policial

Procesado : CR. GARCÍA SUÁREZ CARLOS ANDRÉS
MY. BOHÓRQUEZ SALCEDO CESAR A.
MY. DELGADO HERRERA WILMAR
CT. BOTERO SÁNCHEZ HÉCTOR J.
TE. PERALTA SÁNCHEZ JARRIXON
SI. VEGA RAMÍREZ RUTBER

Delitos : Fraude Procesal, Falsedad
Ideológica en Documento
Público, Falsedad Material en
Documento Público, Abuso de
Autoridad por Acto Arbitrario e
Injusto, Empleo Arbitrario de
la Fuerza Pública, Prevaricato
por Omisión, Ocultamiento,
Alteración o Destrucción de
Elemento Material Probatorio.

Motivo de alzada : Apelación Medida de
Aseguramiento

Decisión : Decreta nulidad de oficio

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo dos mil veintitrés (2023)

I. ASUNTO POR RESOLVER

Le corresponde a la Sala Primera de decisión desatar los recursos de apelación incoados por el Dr. HÉCTOR ALIRIO BOHÓRQUEZ SUÁREZ representando los intereses del CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, el Dr. DIEGO ABDÓN TAMAYO GÓMEZ apoderado del MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, la Dra. CLAUDIA V. CARRASQUILLA MINAMI defensora del MY. WILMAR DELGADO HERRERA, el Dr. LUIS HENRY SILVA RODRÍGUEZ defensor del CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, la Dra. LUZ MIRYAM ALCALÁ RODRÍGUEZ apoderada del TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ y por último el Dr. DIEGO FERNANDO MARÍN MONTOYA representando los intereses del SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ, contra el auto interlocutorio fechado 04 de abril de 2023¹, proferido por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial, mediante el cual resolvió provisionalmente situación jurídica a los investigados imponiéndoles medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario, así:

Por los delitos de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO a los señores CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO y CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ; por el delito de PREVARICATO POR OMISIÓN al MY. WILMAR DELGADO HERRERA; por el tipo penal de FALSEDAD

¹ Cuaderno copia No. 12 folio 2242 y ss.

IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO al TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ y por las conductas punibles FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO y OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO al SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ.

En el mismo sentido se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al CR. GARCÍA SUÁREZ CARLOS ANDRÉS y MY. BOHÓRQUEZ SALCEDO CESAR ALFONSO por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO; al CT. BOTERO SÁNCHEZ HÉCTOR JULIÁN por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO y EMPLEO ARBITRARIO DE LA FUERZA PÚBLICA.

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Fueron reseñados en el auto interlocutorio que resolvió la situación jurídica así:

"Se realiza apertura a la investigación por remisión de copia del expediente disciplinario EE-MEPER-2022-65 del folio 1 al 189, oficio GS-2022-019151-INSGE/CODIN, mediante el cual informa sobre la noticia publicada en medios noticiosos, página web "El Expreso" publicado el 24 de marzo de 2022 titulado "Ministro de defensa vino para un operativo contra drogas falso y fabricado..." Fabricaron una mentira y mostraron al Ministro de Defensa una casa vieja a punto de derrumbarse, habitada por una anciana de 93 años como peligroso centro de delito y droga, indicándose: "la inteligencia de la Metropolitana de Pereira, armó un libreto donde, como denuncian los afectados, con engaños entraron el jueves a la casa en cuestión ubicada en el barrio la Libertad, metieron indigentes y con cámaras en mano, grabaron un supuesto expendio de venta y consumo

de drogas, la "típica olla" y así la presentaron el viernes al Ministro de Defensa Diego Molano Aponte y demás autoridades. Hoy con documentos mostramos que no era ni fue nunca una olla de drogas, que estaba con orden de la Alcaldía para demoler por deterioro, y que ahora esta familia ha sido estigmatizada y señalados como peligrosos delincuentes y traficantes de estupefacientes". El inmueble ubicado en la calle 11 No 5-169 Barrio la Libertad de la ciudad de Pereira (Risaralda), el cual no tendría ninguna relación con este delito, habría sido demolido por "Decisión en firme de proceso verbal abreviado 15-2021-233 Orden Demolición por Amenaza de Ruina", según orden emanada de la Inspección 15 Municipal de Policía Pereira"².

III. ACTUACIÓN PROCESAL

3.1- Mediante oficio No. GS-2022 019151/INSGE-CODIN del 30 de marzo de 2022, el señor Capitán ANTONIO JOSÉ ORTIZ DÍAZ, Jefe (E) Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento No. 6, remite por competencia al Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial el expediente disciplinario donde pone en conocimiento de la Justicia Castrense los hechos referidos en la página web "El Expreso" publicado el 24 de marzo de 2022 titulado "Ministro de Defensa vino para un operativo contra drogas falso y fabricado"³.

3.2- Mediante auto del 30 de marzo de 2022 el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial apertura indagación preliminar contra los institucionales MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. VICTOR JULIÁN BOTERO

² Cuaderno copia No. 12 folio 2242 y 2243.

³ Cuaderno copia No. 1 folio 1 y ss.

SÁNCHEZ, CT. JHON WILLIAM CALDERON MARULANDA y ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN, delito por establecer⁴, ordenando sendas actividades probatorias.

3.3- Con fecha 26 de enero de 2023⁵ el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial se inhibe de iniciar acción penal contra los policiales CT. JHON WILLIAM CALDERON MARULANDA y ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN continuando la indagación preliminar con los demás investigados.

3.4- Mediante correo electrónico recibe el Despacho Instructor demanda de parte civil y poder especial otorgado al DR. JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA, para que represente los intereses de la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO, propietaria del inmueble que se identifica con la nomenclatura calle 11 # 5-16 quien a su vez alude que habitaba el inmueble para el momento de los hechos junto a su nieto CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ, la cual es admitida por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial al proferir auto fechado 21 de febrero de 2023⁶.

3.5- Mediante auto del 17 de marzo de 2023⁷ el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial apertura Investigación Penal en contra de los policiales CR. CARLOS ANDRES GARCÍA SUÁREZ, MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA

⁴ Cuaderno copia No. 1 folio 190 y ss.

⁵ Cuaderno copia No. 4 folio 723 y ss.

⁶ Cuaderno copia No. 6 folio 1025 y ss.

⁷ Cuaderno copia No. 8 folio 1483 y ss.

SÁNCHEZ y el SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO, FRAUDE PROCESAL, OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO Y PREVARICATO POR OMISIÓN.

3.6- Con fecha 17 de marzo de 2023 se libran órdenes de captura con fines de indagatoria contra los señores MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO⁸, CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ⁹, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ¹⁰, MY. WILMAR DELGADO HERRERA¹¹, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ¹² y el SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ¹³.

3.7- El 21 de marzo de 2023 rindió indagatoria el CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ¹⁴ el día 22 del mismo mes y año asistieron a diligencia de indagatoria el CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ¹⁵, el SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ¹⁶, y el MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO¹⁷, por último, para el 23 de marzo hogano rindieron la injurada el MY. WILMAR DELGADO HERRERA¹⁸, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ¹⁹ y CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ²⁰.

⁸ Cuaderno copia No. 8 folio 1492

⁹ Cuaderno copia No. 8 folio 1493

¹⁰ Cuaderno copia No. 8 folio 1494

¹¹ Cuaderno copia No. 8 folio 1495

¹² Cuaderno copia No. 8 folio 1496

¹³ Cuaderno copia No. 8 folio 1497

¹⁴ Cuaderno copia No. 9 folio 1685 y ss.

¹⁵ Cuaderno copia No. 9 folio 1762 y ss.

¹⁶ Cuaderno copia No. 9 folio 1767 y ss.

¹⁷ Cuaderno copia No. 9 folio 1775 y ss.

¹⁸ Cuaderno copia No. 9 folio 1782 y ss.

¹⁹ Cuaderno copia No. 10 folio 1849 y ss.

²⁰ Cuaderno copia No. 10 folio 1852 y ss.

3.8- Mediante auto del 27 de marzo de 2023²¹ el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial ordena cancelar las órdenes de captura con fines de indagatoria, disponiendo que los procesados continúen privados de la libertad hasta que se les resuelva su situación jurídica; a la vez ordena compulsar copias a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública.

3.9- Con auto interlocutorio del 04 de abril de 2023²² el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial definió de manera provisional la situación jurídica de los indagados, imponiendo medida de aseguramiento consistente en detención preventiva a los señores CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO y CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ por los delitos de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO; al MY. WILMAR DELGADO HERRERA por el tipo penal de PREVARICATO POR OMISIÓN; al TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ por el injusto de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO y al SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ por las conductas punibles de FALSEDA MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO y OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO.

Mostrándose en desacuerdo con la medida restrictiva de la libertad decretada, los apoderados Dr. HÉCTOR ALIRIO BOHÓRQUEZ SUÁREZ²³ representando los intereses

²¹ Cuaderno copia No. 10 folio 1879 y ss.

²² Cuaderno copia No. 12 folio 2242 y ss.

²³ Cuaderno copia No. 15 folio 2816 y ss.

del CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, el Dr. DIEGO ABDÓN TAMAYO GÓMEZ²⁴ apoderado del MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, la Dra. CLAUDIA V. CARRASQUILLA MINAMI²⁵ defensora del MY. WILMAR DELGADO HERRERA, el Dr. LUIS HENRY SILVA RODRÍGUEZ²⁶ defensor del CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, la Dra. LUZ MIRYAM ALCALÁ RODRÍGUEZ²⁷ apoderada del TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ y por último el Dr. DIEGO FERNANDO MARÍN MONTTOYA²⁸ representando los intereses del SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ, interpusieron el recurso de alzada ante esta Corporación en contra de la precitada decisión interlocutoria, recursos que concitan la atención de esta Sala de Decisión.

3.10- En su concepto ante esta segunda instancia la Dra. ROSA EUGENIA BENAVIDES DÍAZ Procuradora 3 Judicial Penal II, considera que debe decretarse nulidad del auto mediante el cual se resolvió situación jurídica de los procesados calendada 04 de abril de 2023, por falta de motivación e indebido análisis a los fines de la medida de aseguramiento²⁹.

IV. PROVIDENCIA RECURRIDA

El Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial presenta inicialmente en el auto mediante el cual resuelve situación jurídica de los policiales, un breve relato de los hechos por los cuales se aperturó

²⁴ Cuaderno copia No. 15 folio 2846 y ss.

²⁵ Cuaderno copia No. 14 folio 2633 y ss.

²⁶ Cuaderno copia No. 14 folio 2708 y ss.

²⁷ Cuaderno copia No. 14 folio 2766 y ss.

²⁸ Cuaderno copia No. 14 folio 2748 y ss.

²⁹ Cuaderno copia No. 16 folio 3109 y ss.

la investigación penal, identificando e individualizando a cada uno de los indiciados para posteriormente realizar su calificación provisional de conformidad con el material probatorio recolectado al momento.

Analizada y sustentada la competencia en la Jurisdicción Penal Militar, sostiene que en la calificación provisional son endilgadas las siguientes conductas punibles establecidas en la ley 599 de 2000, así: contra el CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ y el MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO los artículos 453. Fraude Procesal, 286. Falsedad Ideológica en Documento Público y 416. Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto; al señor CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ además de los delitos anteriormente mencionados se adiciona el artículo 423. Empleo Ilegal de la Fuerza Pública; al señor Mayor WILMAR DELGADO HERRERA el artículo 414. Prevaricato por Omisión; al TE. JARRIXON PERALTA SANCHEZ, el artículo 286. Falsedad Ideológica en Documento público y por último al SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ, las conductas punibles consagradas en los artículos 287. Falsedad Material en Documento Público y 454-B. Ocultamiento, Alteración o Destrucción de Elemento Material Probatorio, conforme al siguiente sustento probatorio y jurídico:

4.1- CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ: conforme a lo establecido por el caudal probatorio el Oficial ordenó la elaboración de unos videos a la señorita ST. LUISA MARÍA MORA, los cuales servirían de soporte para la

realización del procedimiento de demolición de una vivienda que presuntamente servía como expendio de estupefacientes, sin embargo, al no observarse una problemática real de expendio de drogas sobre el inmueble en el primer video que le fue enviado, ordenó que se abriera la puerta del inmueble permitiendo el ingreso de los consumidores, indigentes y demás personas que se encontraban en un potrero ubicado debajo del viaducto frente a la casa en cuestión y con ello simular la inseguridad que generaba el bien, presentándolo como un resultado operacional en el marco de la Estrategia o Plan 1000, a pesar de que ésta había perdido su vigencia desde el 15 de marzo de 2022.

Con esta simulación el Oficial superior sustentó falazmente los informes de inteligencia y micro situacionales sobre la inseguridad que representaba el inmueble, los cuales fueron tramitados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (en adelante DIJIN), obteniendo con ello la autorización y apoyo del mando institucional para desplegar las actividades tendientes a la demolición y publicidad del procedimiento sobre la vivienda; maniobra falsaria que llevó al convencimiento no solo del Ministro de Defensa Nacional y al Comandante de la Metropolitana de Policía de Pereira quienes asistieron al derribamiento de esta supuesta olla de microtráfico, sino que además generó la expedición de la orden de servicios No. 052 del 16 de marzo de 2022 el cual es un acto administrativo de carácter operacional.

De lo anterior se tiene que esta simulación sobre la situación de microtráfico en la vivienda, desdibujó la realidad induciendo en error a las autoridades y generando la emisión de un acto administrativo, estructurando con ello el tipo penal de FRAUDE PROCESAL, ejecutando tales actos con pleno conocimiento de su falsedad y comprendiendo la ilicitud de los hechos, siéndole exigible otra conducta conforme su profesión, antigüedad y las funciones que desempeñaba en el grupo de Investigación Criminal.

Respecto a la FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO recae su actuación en la orden que dio para elaborar un segundo video, toda vez que el primero de ellos no mostraba la problemática del expendio y consumo de drogas en la vivienda por lo que ordenó que se ingresaran al inmueble consumidores, indigentes y demás personas para que simularan el consumo de sustancias estupefacientes, constituyéndose el video en un documento público que sirvió como prueba y sustentó la medida de demolición sobre el bien por microtráfico.

Dijo que con este video el señor Coronel alteró la realidad frente al inmueble que iba a ser demolido demostrando una problemática inexistente sobre él, con el fin de demostrar un resultado operacional y utilizando los medios humanos y técnicos de la Metropolitana de Policía de Pereira para realizar el segundo video sobre lo cual es testigo el CT. BOTERO,

la señorita ST. LUISA MORA y el PT. DIEGO HERNÁNDEZ, poniendo en riesgo con su conducta el bien jurídico de la fe pública, con pleno conocimiento del verdadero estado de la vivienda y de la necesidad de alterarla para conseguir el apoyo de sus superiores, y obtener un positivo operacional.

Del ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO se configura al extralimitarse en sus funciones ordenando que se ingrese a la vivienda objeto de demolición a los habitantes de calle e indigentes para el montaje del consumo y expendio de estupefacientes en la propiedad perjudicando además a los dueños del bien, constituyéndose en un comportamiento jurídicamente desaprobado, realizado con conocimiento y conciencia de su ilicitud.

Resaltó el Juzgado Instructor que la responsabilidad del oficial se estructura teniendo en cuenta que para el momento de los hechos se encontraba dirigiendo y validando cada actividad indispensable para llevar a cabo el procedimiento a realizar sobre la vivienda, además de impartir las instrucciones al personal y coordinar cada aspecto logístico como la ubicación de los periodistas, el sonido, la ubicación de la retroexcavadora con el fin de derribar el inmueble por ser denominada una "olla" desarticulando así un expendio de estupefacientes.

Sobre la medida de aseguramiento sustenta el indicio grave proveniente de las pruebas obtenidas en el proceso con las declaraciones bajo la gravedad de

juramento del CT. HÉCTOR BOTERO, ST. LUISA MORA y el PT. DIEGO HERNÁNDEZ, quienes coinciden en afirmar que fue el CR. GARCÍA SUÁREZ quién dio la orden de alterar la realidad ingresando consumidores e indigentes a la vivienda con el fin de simular un expendio de drogas para fundamentar la demolición de la vivienda.

En cuanto a los requisitos legales y constitucionales para imponer la medida de aseguramiento atiende los requisitos establecidos en el artículo 313 de la ley 906 de 2004 y la ley 600 de 2000 según sea el caso por ser delitos comunes con plena observancia al principio de favorabilidad por lo que la pena mínima para imponer la medida de detención preventiva en establecimiento carcelario procede por delitos con una pena mínima que sea o exceda de cuatro (4) años, procediendo la detención para los delitos de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

En consonancia con lo anterior procede a analizar los fines de la medida de aseguramiento y establecer si se ajusta a los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, por lo que consideró el instructor que conforme al artículo 308 de la ley 1407 de 2010 estamos frente a los requisitos uno y dos, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso donde el abogado de víctimas informa al Despacho que sus clientes se han visto atemorizados por vehículos sospechosos en sus lugares de residencia.

En el mismo sentido la Subteniente LUISA MORA, denunció ante la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos como mensajes amenazantes e intimidantes de números desconocidos, relacionando los mensajes con el hecho de haber rendido testimonio en el presente caso, por lo tanto, deduce el Despacho que los imputados pueden inducir a los testigos del proceso a cambiar versiones o realizar maniobras tendientes a variar las declaraciones suscitadas dentro del mismos.

Argumentó sobre considerarlo un peligro para la sociedad, la víctima o de la Fuerza Pública, que el señor oficial desde su actual posición como Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, puede continuar con este tipo de conductas delictivas que no solo ponen en peligro a la comunidad castrense sino también a la sociedad en general, considerando además que de los testimonios se deriva que la actuación del oficial es frecuente en los procedimientos realizados en el marco del plan 1000, por lo que su conducta es sistemática infiriendo continuidad en la actividad delictiva representando un peligro para la sociedad y la Fuerza pública.

En relación con la conminación establece que no es procedente porque los delitos imputados no son sancionados con arresto y en el mismo sentido se pronuncia respecto de la multa debido a que ésta es aplicable a delitos cuya pena mínima es inferior a dos años; de esta manera concluye que la medida de aseguramiento que procede en este caso es la detención

preventiva para garantizar el debido ejercicio de la justicia y que el imputado no constituya un peligro para la sociedad o la Fuerza Pública toda vez que por su grado institucional puede inducir de cierta manera en los testigos e incluso continuar con actividades delictivas.

En concreto, sobre la necesidad de la detención preventiva, la actuación del señor Oficial GARCÍA SUÁREZ colocó un manto de duda respecto de la credibilidad de las instituciones y operaciones realizadas en el marco del plan 1000, desechando el trabajo de los demás uniformados y utilizando su grado y cargo para dominar el hecho, en cuanto a la urgencia para imponer la medida asevera que esta radica en el riesgo que représenta al continuar ejerciendo sus funciones como Subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, posición con dominio jerárquico y direccionamiento que le permite tener una injerencia en el manejo de las evidencias.

Culmina exponiendo el argumento de la imposición de la medida explicando que resulta idónea para la protección de la comunidad, necesaria por su condición jerárquica dentro de la institución lo cual le permitiría obstruir la justicia e inducir testigos, la considera a su vez proporcional por el grado de afectación y el impacto social en general y por último razonable debido a que los elementos probatorios permiten inferir su responsabilidad sobre los delitos imputados, por lo que impone medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva contra el CR.

CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, por los delitos de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, dejando de lado el delito de ACTO ARBITRARIO E INJUSTO teniendo en cuenta que contra este no procede medida restrictiva de la libertad porque no reúne los requisitos formales para su imposición.

4.2- Del MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO: argumentó la medida de aseguramiento al establecer que para la fecha de los hechos el señor Oficial se encontraba en la ciudad de Pereira para verificar el procedimiento de demolición de la vivienda, comprobando la elaboración de unos videos que servirían de soporte documental para la realización del procedimiento, ordenando a la ST. LUISA MARÍA MORA volver a realizarlos ya que no se observó una problemática real de expendio de sustancias alucinógenas en el video que le fue enviado inicialmente, ordenando junto al CR. GARCÍA SUÁREZ que se abriera la puerta de la vivienda y se ingresara a los consumidores, indigentes y demás personas que se encontraban en un potrero que queda bajo el viaducto frente a la casa y con ello simular la inseguridad que genera la vivienda soportando a su vez el motivo para demolerla.

Por los hechos mencionados se imputó el delito de FRAUDE PROCESAL teniendo en cuenta que conocedor de la pérdida de la vigencia de la Estrategia o Plan 1000, continua con el proceso de verificación de los videos que iban a servir como prueba para el procedimiento de demolición ordenando la elaboración

de otro video que contara con la participación de consumidores, indigentes y demás para que simularan el consumo y así soportar los informes de inteligencia y micro situacionales de seguridad, los cuales al ser tramitados a la Regional de la DIJIN, generó el apoyo y aprobación de los superiores para demoler el inmueble, generándose para su ejecución la Orden de Servicios No. 052 del 16 de marzo de 2022, actividad que contó con la presencia del Ministro de Defensa Nacional.

Resalta entre los hechos que para ese momento el señor Oficial era el Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN, por lo que la elaboración y presentación de los videos en mención llevaron al convencimiento del señor Ministro de Defensa Nacional quien asistió al derribamiento de la supuesta "olla" induciendo en error mediante actos engañosos que desdibujaron la realidad siendo el responsable de dar el visto bueno a los videos, como fue manifestado en las declaraciones de algunos oficiales como el señor MY. WILMAR DELGADO, CR. ANÍBAL VILLAMIZAR, TE. JARRIXON PERALTA, la CR. ANA GABRIELA GUTIÉRREZ y ST. LUISA MARÍA MORA.

En este punto coinciden las versiones en asegurar que era el MY. BOHÓRQUEZ SALCEDO el encargado de supervisar los videos que fundamentarían la orden de demolición del bien inmueble, llegando al punto no solo de dar la orden de realizar modificaciones para realizar otro video que demostrara la problemática que requería para el procedimiento, por lo que entra

en escena como supervisor validando lo actuado con pleno conocimiento de la forma en que se realizó la simulación del consumo de drogas en el lugar, con el fin de presentarlo como un éxito operacional, es decir, induciendo en error sobre la realidad de la vivienda, generando efectos negativos a sus propietarios viéndose sometidos al escarnio público y en riesgo frente a los posibles actores ilegales que operan en el sector.

Sustenta el dolo y la antijuridicidad basado en el conocimiento que tenía sobre la ilegalidad de su conducta y el bien jurídico lesionado con su actuación, constituyéndose en un comportamiento jurídicamente desaprobado, además de ser conocedor del motivo real de la demolición de la vivienda el cual era la amenaza de ruina y no por microtráfico, convirtiéndose en coautor de este delito sin que exista causal de justificación; suma demás a su análisis sobre la culpabilidad la capacidad de entender la ilicitud de su conducta y asimismo a determinarse de acuerdo a esa comprensión, siéndole exigible otro comportamiento debido a su jerarquía, antigüedad y conocimientos adquiridos en el desarrollo de su profesión.

Se le imputa también el delito de FALSEDA IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, teniendo en cuenta que a pesar de conocer que no existía una problemática de consumo de estupefacientes en el inmueble objeto de demolición, ordena la elaboración de nuevas imágenes con indigentes y consumidores en su interior lo cual

le permite soportar falazmente una situación de microtráfico que aunque inexistente sirve para demostrar un positivo operacional, constituyéndose dicho video en un documento público que sirvió de sustento para las órdenes que se tomaron posteriormente.

La falsedad radica entonces en que, siendo conocedor de la verdadera razón de demolición de la vivienda, altera la realidad ordenando la elaboración de un video sobre el bien, donde se ingresan drogadictos, habitantes de calle y demás personas que se encontraban en un potrero para que simularan una problemática que no existía validando la situación como auténtica y con ello presentarlo como el derribamiento de una "olla", lesionando el bien jurídico de la fe pública.

Este delito le es imputado en calidad de COAUTOR, satisfaciendo lo requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad basados en el conocimiento pleno de sus actos, la lesión efectiva al bien jurídico, la capacidad de comprender su ilicitud y de autodeterminarse frente a los mismos debido a su profesión, trayectoria, antigüedad y jerarquía, por lo cual le era dable actuar de otra manera.

Por último, se le atribuye el tipo penal de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO teniendo en cuenta que en el lugar de los hechos y en el ejercicio de sus funciones el señor Oficial ordena a los

habitantes de calle e indigentes del sector el ingreso a la vivienda para realizar las filmaciones correspondientes sobre el lugar sin la autorización de los propietarios, lo cual tiene como única finalidad realizar un montaje sobre una situación irreal en el bien y que sirvió como sustento del despliegue operacional de la DIJIN para su demolición como un positivo operacional contra el microtráfico en el marco de la Estrategia o Plan 1000.

Representa entonces esta acción un abuso de sus funciones el cual va en contravía de las personas que ante la sociedad gozaban de un buen nombre siendo expuestas públicamente por una situación ajena a la realidad, actuación que puso en peligro el bien jurídico tutelado de la administración pública realizando un acto arbitrario contra los propietarios del inmueble al ingresar sin su autorización a personas de la calle y consumidores a su interior con el fin de construir un escenario que sirviera como soporte de una problemática inexistente.

Este delito le fue imputado en calidad de COAUTOR, satisfaciendo los requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad basados en el conocimiento pleno de sus actos, la lesión efectiva al bien jurídico y la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y de autodeterminarse frente a los mismos debido a su profesión, trayectoria, antigüedad, jerarquía, por lo cual le era dable actuar de otra manera, sin que exista una causal de justificación.

Indicó frente a las exculpaciones dadas en la ampliación de su indagatoria las cuales están encaminadas a estructurar la atipicidad de la conducta, que no son de recibo teniendo en cuenta que sobre él recae una presunta responsabilidad tanto en su aspecto funcional como Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN encontrándose entre sus funciones "Asesorar al Director, Jefe o Comandante de la Unidad en la ejecución de los parámetros de la comunicación pública, para contribuir al logro de los objetivos institucionales de credibilidad y confianza de los grupos de interés internos y externos".

En el mismo sentido resaltó que su responsabilidad se desprende también de su jerarquía y antigüedad con el cual realizó la verificación de todos los aspectos del procedimiento, puntualmente la elaboración de los videos partiendo de que el personal que estaba presente vio en el Oficial la figura representativa de quien dirige y valida las actuaciones y su legalidad, por lo que dio instrucciones sobre la coordinación para llevar a cabo la demolición, los medios logísticos y de comunicación, teniendo también a su cargo la verificación de los requisitos de la vivienda para su derribamiento.

Fundamentó la imposición de la medida de aseguramiento inicialmente con el indicio grave obtenido de las declaraciones de la ST. LUISA MORA, el PT. DIEGO HERNÁNDEZ y la TC. ANA GABRIELA, quienes afirmaron

bajo la gravedad de juramento que el oficial dio la orden de ingresar a los habitantes de calle y consumidores a la vivienda para simular el consumo de estupefacientes y con ello soportar la demolición como un fin operacional.

Hace referencia para la imposición de medida de aseguramiento el cumplimiento de los requisitos formales, sustanciales y objetivos para continuar con los fines de la medida de aseguramiento considerando que frente al investigado podría obstruir el debido ejercicio de la justicia además de constituirse un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, fundamentado en la denuncia presentada por la ST. LUISA MARÍA MORA respecto de los mensajes amenazantes que ha recibido en su contra proveniente de números desconocidos junto a otros hechos intimidantes, además del cargo que continua ostentando como Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN, con el cual podría continuar con la comisión de este tipo de conductas poniendo en peligro a la comunidad castrense y la sociedad en general.

Del mismo modo argumentó que conforme a la versión expuesta por el MY. DELGADO HERRERA, quien manifestó que esta conducta es común en todos los procedimientos realizados en el marco del plan 1000, se infiere razonablemente que existe continuidad en la actividad delictiva constituyéndose el imputado en un peligro para la seguridad de la sociedad y la Fuerza Pública.

Finalmente hace alusión sobre la pena estipulada para los delitos imputados por lo que procede la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, considerándola idónea atendiendo a la modalidad de la conducta y la protección del fin constitucional, necesaria para proteger a la comunidad y evitar que el imputado obstruya la justicia y pueda inducir a los testigos a alterar su versión de los hechos; proporcional por la afectación social con que su conducta desplegó un impacto en la sociedad y razonable teniendo en cuenta la gravedad de los delitos imputados; aclarando por último que la medida no procede por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO.

4.3- CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ: en términos similares a los expuestos para los oficiales anteriormente mencionados, el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial imputó los delitos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO, teniendo en cuenta que para la fecha de los hechos, es decir, para el 17 de marzo de 2022 se encontraba ejerciendo las funciones de Subjefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Metropolitana de Policía de Pereira (MEPER) por lo cual recibe la orden del MY. DELGADO de conseguir una casa para realizar la demolición en la visita del señor Ministro de Defensa Nacional, procediendo de manera irregular a conseguir direcciones de inmuebles que estuviesen con orden administrativa policial para demolición por cualquier motivo en las inspecciones

de policía, ubicando así la vivienda objeto del presente caso induciendo en error al MY. DELGADO y la TC. ANA GABRIELA de la condición real del bien demostrando que cumplía con los requisitos para ser demolida por expendio del microtráfico, para lo cual estuvo presente junto al CR. GARCÍA y el MY BOHÓRQUEZ cuando permitieron el ingreso de personas al inmueble para simular el consumo y expendio de drogas.

Le fue imputado además de los delitos mencionados anteriormente, la conducta punible el EMPLEO ARBITRARIO DE LA FUERZA PÚBLICA, fundamentado en que el señor oficial utilizó funcionarios adscritos a la seccional de Investigación Criminal MEPER para ubicar inmuebles que se encontraban en miras de ser demolidos por ruina, desviando así la orden impartida por el mando institucional y con ello presentar un falso resultado operacional, por lo que recalca el Despacho que esta utilización se da en sede del acto arbitrario propiamente dicha de demoler la casa y hacerla pasar como un éxito en la lucha contra el expendio de drogas, en el pleno uso de sus facultades legales y usando para conseguir su fin al personal que se encontraba bajo su mando.

Respecto a este tipo penal se le atribuye en calidad de determinador, con pleno conocimiento de su ilicitud, sin que exista una causal de justificación y vulnerando el bien jurídicamente tutelado, con plena capacidad de entender la ilicitud de su conducta y autodeterminarse frente a ella, por lo que su conducta es típica, antijurídica y culpable.

Frente a la imposición de la medida de aseguramiento estipuló que conforme a los requisitos establecidos en la ley 522 de 1999 del régimen punitivo Castrense se encuentra argumentado el indicio grave de responsabilidad ya que las declaraciones refieren que el Oficial dio la orden al personal de la búsqueda de los inmuebles para demolición por cualquier motivo.

Respecto a los requisitos legales y constitucionales para imponer la medida de aseguramiento hace alusión a la jurisprudencia del Tribunal Superior Militar y Policial sosteniendo que frente a este último delito no procede la medida privativa de la libertad porque carece de los requisitos objetivos.

4.4- MY. WILMAR DELGADO HERRERA: Se le imputa el delito de PREVARICATO POR OMISIÓN basado en que incumplió su deber de verificación cuando recibió la orden por parte de la TC. ANA GABRIELA de buscar un inmueble para demoler por microtráfico, delegando la tarea en el Subjefe de la seccional, es decir en el CT. BOTERO SÁNCHEZ dejando de lado sus funciones de control y comprobación sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos al inmueble que el Oficial consiguió en cumplimiento a su orden, sobre el cual se desprenden los errores cometidos por sus superiores.

En la interpretación del Despacho sobre las definiciones dogmáticas de este delito los enmarca en la infracción de deber, donde el actuar típico,

antijurídico y culpable del servidor público radica en las acciones de omisión frente a sus funciones, el retardo o la denegación al deber funcional, considerando que es claro que su conducta de control y verificación sobre la orden delegada en el Subjefe de la Seccional no se cumplió generando el error inducido en sus superiores y desencadenando los hechos constitutivos de este proceso, desconociendo e incumpliendo sus funciones como Jefe de la Seccional de Investigación Criminal MEPER, demostrando desinterés en el ejercicio de sus funciones y falta de verificación del marco normativo.

También desconoció las instrucciones dadas en el oficio S-2021-001707-DISEC, donde claramente establecía los pasos a seguir para conseguir la demolición de la vivienda omitiendo su deber de cumplir fielmente las indicaciones dadas por el mando institucional en la realización de este tipo de procedimientos, sumado al incumplimiento de las funciones propias de su cargo estipuladas en la Resolución No. 00937 de 2016, logrando la demolición de la vivienda en un tiempo récord de tres días, sin que verificara el cumplimiento del marco legal para este tipo de actuaciones.

Su omisión en la verificación y control sobre el cumplimiento del marco legal y los requisitos que debía reunir la vivienda para su demolición permitió presentar la simulada situación de consumo y expendio de drogas en la propiedad siendo finalmente presentada como producto de un resultado operacional aun cuando

conocían que la orden fue emanada por el Inspector de Policía con anterioridad por amenaza de ruina y no por microtráfico.

De esta manera puso en peligro efectivo el bien jurídico de la administración pública toda vez que omitió un acto propio de sus funciones impuestas también en la Orden de Servicios No. 016 del 16 de marzo de 2022, ejecutando la acción con dolo ya que tenía conocimiento que esa casa no funcionaba como un expendio de drogas, realizando la acción como determinador y sin que existiera ninguna causal de justificación, siendo la conducta típica, antijurídica y culpable debido a que era plenamente consciente y con la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión.

Para la imposición de la medida argumentó que existe el indicio grave de responsabilidad basado en las pruebas reunidas dentro del plenario, específicamente en las declaraciones obtenidas de la TC. ANA GABRIELA, ST. LUISA MARÍA MORA y el PT. DIEGO HERNANDEZ, por lo que pasa a verificar los requisitos exigidos para la imposición de la medida estipulados en la ley 522 de 1999 y la ley 1407 de 2010 en los artículos 529 y 467 respectivamente, sin embargo y conforme a la jurisprudencia, por tratarse de un delito común se remite al art. 313 de la ley 906 de 2004 para verificar los requisitos objetivos y la ley 600 de 2000, la cual estipula que la detención preventiva procede para

delitos que tengan prevista una pena mínima de prisión de cuatro años.

Respecto a los fines constitucionales y legales de la medida de aseguramiento estableció que desde el cargo que ostentaba al momento de su captura como Comandante de la Estación de Policía de Mosquera es posible que continúe con este tipo de conductas representando un peligro para la comunidad castrense y la sociedad en general, valorando en el mismo sentido que el imputado puede obstruir el ejercicio de la justicia teniendo en cuenta su grado, antigüedad y cargo.

En su valoración expuso que la medida de la detención preventiva resulta procedente porque la pena estipulada para el delito es superior a dos años, siendo idónea para la protección de los fines constitucionales y la comunidad, necesaria para evitar la obstrucción a la justicia induciendo a los testigos a modificar sus versiones de los hechos, proporcional por el impacto general sobre la sociedad ocasionada por su conducta y razonable frente a la gravedad de su actuación.

4.5- TE. JARRIXON PERALTA SANCHEZ: El Despacho instructor estableció que para la fecha de los hechos el señor Oficial se encontraba bajo el mando del señor CR. GARCÍA SUÁREZ coadyuvando con la demolición del inmueble por lo que orientó e indicó la redacción de los formatos que fueron soporte de la demolición del inmueble dentro del marco operacional del Plan 1000,

imputándole el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO.

Su actuación es corroborada por el PT. CORREDOR quien manifiesta que el Oficial junto al SI. VEGA RUTBER fueron los encargados de diligenciar la documentación para gestionar la demolición, por lo que la conducta típica endilgada recae sobre los mensajes de datos, es decir, los documentos enviados a la Regional de Investigación Criminal y que eran el soporte del procedimiento como lo fue el informe de inteligencia y demás, los cuales fueron elaborados por los policiales en cuestión sin que se haya determinado si salieron del correo del SI. VEGA.

Lo anterior permite validar que los documentos que fueron anexados y contruados por el TE. PERALTA SANCHEZ, son de carácter público, y demuestran que el Oficial alteró la realidad frente a la situación de la vivienda realizando manifestaciones falsas en los documentos soporte de la demolición, validando con ello el montaje que sirvió finalmente para presentar un resultado operacional inexistente, sin perder de vista que este inmueble nunca tuvo denuncia que permitiera demostrar que estaba dedicado al consumo y expendio de sustancias estupefacientes.

En la valoración de la tipicidad de la conducta le es imputada como determinador sin que exista causal de justificación y una lesión efectiva al bien jurídico tutelado siendo antijurídica, en el mismo sentido respecto a la culpabilidad establece que tenía la

capacidad plena para entender la ilicitud y autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, máxime cuando le era exigible otro comportamiento, por su profesión como policía.

Respecto a la medida de aseguramiento estableció el indicio grave en las declaraciones de la TC. ANA GABRIELA, ST. LUISA MORA, PT. CORREDOR y el PT. DIEGO HERNÁNDEZ, analizando posteriormente los requisitos objetivos de la medida y luego los fines constitucionales y legales argumentando que puede obstruir la justicia y representar un riesgo para la comunidad y la sociedad en general, teniendo en cuenta que esta actuación se ha llevado a cabo sistemáticamente en todos los procedimientos que han tenido este fin, en el mismo sentido la ST. LUISA MORA, ha denunciado que ha sido víctima de mensajes amenazantes e intimidantes por lo que podría incidir en el cambio de las versiones de los hechos dadas por los declarantes.

Una vez que presentó el cumplimiento de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento, consistente en la detención preventiva, estableció que la misma es idónea, necesaria, proporcional y razonable en los mismos términos en que sustentó la medida para los anteriores investigados.

4.6- ST. RUTBER VEGA RAMIREZ: la situación fáctica se concentra en que para los días 16, 17 y 18 de marzo de 2022 se encontraba encargado de la Estrategia Contra el Tráfico de Estupefacientes en menores

cantidades y en compañía del TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ elaboró los documentos que sirvieron de sustento ante la Regional de Investigación Criminal No. 3 demostrando con ellos que el inmueble cumplía con los requisitos para ser demolidos, imputándole por ello el delito de FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO inicialmente.

En la elaboración de estos documentos el señor Subintendente hizo los formatos e inserto en ellos manifestaciones propias y de terceros que construyeron los documentos soporte de la demolición, enviándolos desde su correo institucional y certificando con ello la elaboración de los mismos, actuación que realiza como servidor público y consciente de la situación real de la vivienda, posteriormente expone el Instructor los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, donde se estableció que realizó la conducta como determinador y sin que existiera una causal de justificación

Seguidamente endilga el delito de OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO debido a que estando como encargado del proceso, ocultó los documentos que sirvieron como soporte para la demolición los cuales fueron enviados desde su correo institucional a la Regional de Investigación Criminal No. 3, toda vez que no entregó la carpeta con los documentos probatorios que permitían establecer de manera clara la ruta de acción legal y procesal para la demolición, obrando dentro del proceso únicamente la respuesta de la Seccional

de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Pereira donde informa que la carpeta en mención no existe.

Respecto a la medida de aseguramiento, establece el Juez Instructor que el indicio grave se encuentra probado con la declaración del PT. CORREDOR GRANADA JUAN PABLO y la prueba documental obrante a folio 1289 y 1299, verificando los demás requisitos formales y sustanciales para la imposición de la medida contenidos en la ley 522 de 1999 y 1407 de 2010 argumentando los fines de la pena considerando que el procesado puede obstruir el debido ejercicio de la justicia y representar un peligro para la sociedad o la víctima, sosteniendo que obran informes dentro del proceso donde el apoderado de las víctimas comunica al Despacho que sus clientes se han visto atemorizados.

Prosigue haciendo alusión la idoneidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la detención preventiva como medida de aseguramiento a imponer en los mismos términos utilizados para los anteriores investigados.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Para efectos metodológicos se expondrá a continuación de manera sucinta los principales argumentos suasorios de cada uno de los defensores de los procesados, quienes presentaron y sustentaron dentro de los términos legales recurso de apelación contra

el auto mediante el cual el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial resolvió la situación jurídica fechado 04 de abril de 2023, así:

5.1- Doctor HÉCTOR ALIRIO BOHÓRQUEZ SUÁREZ³⁰ representando los intereses del CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ.

En su sentir, el problema en jurídico a resolver es la ausencia de las categorías dogmáticas a las conductas punibles enrostradas a su prohiado, enfatizando que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, sin embargo, enfatiza que desde el inicio del proceso se le han vulnerado los derechos a su representado, en razón a que jamás fue informado sobre la existencia de la investigación aun cuando el procesado le solicitó al Juzgado desde el 8 de marzo del año en curso que se le informara si existía alguna investigación en su contra, fue sorprendido con una orden de captura con fines de indagatoria.

Consideró que si bien es cierto que el artículo 511 del Código Penal Militar, le da al Juez la opción de emitir la Captura Facultativa, también lo es que desconoció principios de la dignidad humana y legalidad de raigambre constitucional y convencional; cuando a raja tabla el juez hace uso de la medida extrema de privar a una persona de su libertad, existiendo otros mecanismos para buscar su

³⁰ Cuaderno copia No. 15 folio 2816 y ss.

presentación al proceso, y en cambio se practicó una serie de diligencias sin tener la posibilidad de hacer uso del derecho de defensa y en el mismo sentido presentar pruebas o controvertir las que se alleguen en su contra, según lo determina el artículo 29 Superior. Realidad ésta que, de cara al modelo de Estado Social de Derecho, da lugar a la nulidad del auto que dispuso la apertura de investigación y de todas aquellas piezas que fueron tomadas a espaldas de su defendido.

Luego del análisis de tipicidad de los delitos de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO considera que no se demostró la coautoría por vía indirecta o indiciaria aduciendo que la versión de la ST LUISA MARÍA MORA carece de respaldo, toda vez que para el togado la prueba testimonial es la menos fiable, debido a la flaqueza del ser humano en su sensación, percepción y representación según las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que hayan ocurrido los hechos, sin que su defendido haya tenido la oportunidad de controvertirlo.

Afirma el togado, que el Juez se limitó a hacer aseveraciones sin respaldo probatorio dejando de lado que, el proceso de demolición fue un asunto reglado a través de los instrumentos anteriormente referenciados y que el señor Coronel GARCIA lo colocó de presente tanto en su diligencia de indagatoria como en la ampliación de la misma, destacando: i) La Directiva Operativa Transitoria 011 del 13 de marzo de 2022 a través de la cual se establecen "parámetros

de actuación policial para el despliegue de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes ECTRE." ii) Orden de servicios No. 052 del 16 de marzo de 2022 del Comando de la Policía Metropolitana de Pereira en la que se consigna: "DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON OCASIÓN DE LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA A LA CIUDAD DE PEREIRA".

Por lo que infiere que, dicho documento fue elaborado y publicado el 16 de marzo de 2022, un día antes de hacerse presente el personal de la DIJIN, incluyendo al coronel GARCÍA SUÁREZ y donde las responsabilidades estaban claramente establecidas, criticando demás que el Juez da por hecho que los videos son el soporte para realizar la demolición, cuando en realidad estos registros no son la base de la decisión que emitió la autoridad competente para demoler el inmueble.

El derribamiento del mito de inseguridad o demolición, se encontraba establecido en la Comunicación Oficial S- 2021-001707 DISEC de fecha 23 de enero de 2021, firmada por el Mayor General CARLOS RODRÍGUEZ, dirigida a los Comandantes de Región, Departamentos y Metropolitanas, dando alcance al plan choque y estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, estableciendo en primer lugar que no es cierta la afirmación del Juzgado en el sentido que el marco operacional ya había perdido vigencia, y segundo, que somos un Estado Social de Derecho en el que todas sus actividades se desarrollan dentro de un marco jurídico, y éste, para el caso de análisis, lo constituye entre otras, la Directiva Operativa

Transitoria 011/22 y - La Orden de servicios No. 052 del 16 de marzo de 2022 y -La orden de despliegue y operacionalización Plan 1000 Actividades Contra Microtráfico, emitida el 2 de febrero de 2022.

Lo anterior significa que, las instrucciones y responsabilidades estaban previamente establecidas antes de la llegada del Oficial al lugar, sin que su sola presencia releve a los titulares que las poseían, toda vez que su función era la de coordinar los actos relacionados con la preparación del escenario del derribamiento de la vivienda la cual contaría con la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional en aquella fecha y nada más.

Expuso que el funcionario instructor no llegó a demostrar la existencia de la coautoría, pues como ilustra el extracto jurisprudencial para que ella se dé, tienen que cumplirse unos presupuestos requiriendo que al menos el oficial en comento hubiera tenido contacto directo o telefónico con las personas responsable de la edición del video y las hubiera influenciado para hacerlo de una o de otra manera, lo cual no se encuentra probado.

Reiteró que, tampoco es cierto que su defendido llevó a error al Comandante de dicha unidad al expedir "una Orden de servicios con el fin de realizar dicha demolición", pues es claro, como se advierte en la Orden de servicios No. 052 expedida por el Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, esta fue elaborada y publicada el 16 de marzo de 2022, fecha

para la cual el señor Coronel GARCÍA no había llegado a la ciudad de Pereira, sobre lo que agregó que tampoco se dio a conocer concertación alguna o acuerdo de voluntades para llevar al referido Comandante al engaño emitiendo dicho acto administrativo.

Por lo que concluye que, si no existió la conducta punible endilgada, es imposible abordar los presupuestos de la medida de aseguramiento; en el mismo sentido refirió que a la luz del artículo 523 del Estatuto Penal Castrense, se requiere por lo menos un indicio grave de responsabilidad para imponer medida de aseguramiento ofreciendo las pruebas que lo respaldan, hecho que por ninguna parte se avizoró en la decisión del Juez de Instrucción.

De igual forma afirmó el Despacho que la medida es necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la Justicia y que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, lo cual no tiene sustento probatorio ya que el proceso adolece de una investigación seria e imparcial y los antecedentes dan muestra que el procesado no tiene en su haber reproche alguno que lleve a pensar que constituye un peligro para la sociedad y menos para la víctima, lo cual fue sustentado con la denuncia presentada por la ST. LUISA MORA la cual está en investigación, sin que se haya determinado su autor.

Ahora bien, aduce que en tratándose del número de delitos que se le imputan y la naturaleza de estos,

sin embargo, al respecto no se han dado los elementos estructurales siquiera de una de las categorías dogmáticas como es la TIPICIDAD y en consecuencia considera que hay ausencia de conducta punible por lo que solicita que se revoque la medida de aseguramiento de privación de la libertad dentro de establecimiento carcelario y en consecuencia se disponga su libertad de manera inmediata, por ausencia de los presupuestos que rigen la anunciada medida.

5.2- Doctor DIEGO ABDÓN TAMAYO GÓMEZ³¹ apoderado del MY. CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO.

Estructuró sus argumentos persuasivos advirtiéndole inicialmente que la decisión objeto de recurso presenta protuberantes violaciones al debido proceso y derecho de defensa de su prohiado que le permiten concluir que no cumple con los presupuestos constitucionales ni legales para endilgar los delitos imputados y menos aún sustentar la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva.

Las razones de inconformidad versan principalmente sobre la vinculación inicial en la cual aunque el Despacho Instructor contaba con el grado, nombre completo e identificación de su defendido no procedió a citarlo ni vincularlo en debida forma al inicio de la investigación, situación que le cercenó su derecho de contradicción probatoria durante el transcurso de casi un año mediante el cual se practicaron pruebas

³¹ Cuaderno copia No. 15 folio 2846 y ss.

con su pleno desconocimiento, situación que llevó a la defensa a solicitar la nulidad ante el A quo y al no ser admitida por esta se interpuso el respectivo recurso de apelación ante la Segunda Instancia.

Posteriormente presenta un análisis probatorio confrontando las versiones que los diferentes declarantes presentaron tanto en materia disciplinaria como dentro del presente proceso penal militar exponiendo las diferencias e inconsistencias entre las mismas para continuar con un breve examen sobre los delitos enrostrados y los requisitos para la estructuración de cada uno de ellos.

Sostiene frente a lo expuesto por el Juez de Instrucción que realizó una valoración parcial y no en conjunto del material probatorio, dándole una extrema credibilidad a las manifestaciones de algunos testigos sobre las cuales en una lectura integral puede concluirse que están encaminadas a desviar la atención de la administración de justicia avizorándose una presunta participación en los mismos hechos, exponiendo como ejemplo lo declarado por la TC. ANA GABRIELA GUTIÉRREZ NARANJO y el CR. ANÍBAL VILLAMIZAR SERRANO de los que se podrían desprender otras interpretaciones y no exclusivamente la presentada por el A quo.

Del mismo análisis al compendio procesal el censor afirma de cara al acto administrativo No. 052 COMAN PLANE que se realizó una valoración parcializada lo que llevó al Instructor a la errada calificación del

tipo penal contra su defendido, dejando de lado a quienes probablemente tengan responsabilidad sobre los hechos, advirtiéndolo que al momento de fundamentar la estructuración del tipo penal de Fraude Procesal como autor trae a colación hechos o sucesos que no inciden en la motivación o firma del acto administrativo en cuestión, sin que además argumente en debida forma el dolo.

Sobre la Falsedad Ideológica en Documento Público señala que la responsabilidad de ubicar y verificar debidamente el inmueble que se veía afectado por esta problemática delincuencia estaba en cabeza de dicha unidad de Policía Judicial, para lo cual tenía el deber de desplegar actividades investigativas para recolectar los medios probatorios necesarios que demostraran su situación sin que ello les permitiera simular la problemática o llegar al extremo de realizar montajes para ello.

Por lo anterior realiza un estudio sobre el deber y el actuar de la señorita ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN quien junto al SI. DIEGO TORRES tendrían conocimiento de manera directa de las irregularidades presentadas sobre los elementos videográficos tomados por el señor PT. HERNÁNDEZ, enfatizando que la Oficial en mención envió el video vía WhatsApp a su prohiado y en ese sentido éste nunca tuvo conocimiento del contenido ilusorio ya que jamás dimensionó la actuación delictiva de la Teniente.

Sumado a lo anterior resalta las funciones que tenía el investigado frente a las actividades a realizar de lo cual enfatiza que ninguna de sus funciones le daba la posibilidad de ordenar o direccionar la elaboración de alguna pieza videográfica, considerando vacía la afirmación del Instructor al imputar la Falsedad Ideológica en Documento Público en calidad de coautor, ya que no hubo participación del mismo en la producción de los videos presentados por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas COEST MEPER y mucho menos fue el encargado de su difusión pública sin que tampoco se encuentre demostrado el dolo.

Por último, en su análisis frente al tipo penal de Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto considera que existe una ausencia de tipicidad teniendo en cuenta que su asistencia al evento se debió a unos acontecimientos muy puntuales como fue el ensayo y la rueda de prensa con el señor Ministro de Defensa Nacional, siendo falsa la afirmación de señalar a su defendido como quien dio la orden para que se ingresara a la vivienda los indigentes y consumidores del sector para simular la situación de expendio y consumo de estupefacientes, lo cual dista del análisis sobre el material probatorio que existe dentro del plenario.

Por lo anterior hace alusión al testimonio del señor Patrullero DAVID FERNANDO HERNÁNDEZ LOAIZA y el rol desempeñado por la ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN enunciando apartes de otras declaraciones que permiten reafirmar su postura defensiva, presentando

subsiguientemente un análisis sobre las normas que rigen la medida de aseguramiento en el sistema penal castrense destacando en la comprobación de los presupuestos de contenido sustancial, es decir el cumplimiento de los fines de la medida sobre los criterios de necesidad y razonabilidad.

Resaltó demás que no se realizó una valoración integral del compendio probatorio sustentando la medida contra su defendido con valoraciones parciales de las pruebas, fundamentos errados y alejados de la realidad para demostrar un indicio grave con declaraciones de funcionarios que claramente tienen cierta responsabilidad sobre los hechos, solicitando la atipicidad de las conductas endilgadas y la revocatoria inmediata de la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad en establecimiento carcelario por ausencia de los presupuestos que rigen la medida.

5.3- Doctora CLAUDIA V. CARRASQUILLA MINAMI³²
defensora del MY. WILMAR DELGADO HERRERA.

La togada consideró inicialmente que existen múltiples irregularidades en el proceso y en el auto que resolvió situación jurídica, los cuales vulneran el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica como pilares fundamentales del proceso en la Justicia Penal Militar y Policial.

³² Cuaderno copia No. 14 folio 2633 y ss.

Prosiguió señalando irregularidades sobre la captura, su legalización y posterior resolución de situación jurídica, considerándolos contrarios a los principios de la dignidad humana y el derecho a la libertad, refiriendo que hubo una dilación de términos desde la captura, su vinculación y posterior resolución de situación jurídica, lo cual estructura una violación flagrante al debido Proceso, la legalidad y la seguridad jurídica, por cuanto el Despacho juega con los términos y las normas aplicables al caso según su conveniencia, afectando de paso el derecho a la defensa.

Frente a la conducta punible imputada a su defendido consideró que, de acuerdo con las definiciones dogmáticas del delito, este se enmarca en aquellos de infracción del deber, donde el actuar típico, antijurídico y culpable del servidor público, radica en las acciones de omisión frente a sus funciones, el retardo de estas o la denegación de un deber funcional, sin definir cuál de los verbos rectores le endilga al procesado.

A su parecer, las acciones del Juez 167 fueron descontextualizadas y forzadas al pretender imputar un delito que no reúne las características típicas para su aplicación, dejando de lado lo verdaderamente importante dentro de su obligación, como lo es establecer la ocurrencia del hecho y la posible conducta transgredida.

Otro cuestionamiento recae sobre la calidad de determinador de la conducta, por cuanto resulta extraño que no le endilgue la autoría de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 599 de 2000, sino la participación conforme al artículo 30 de la misma, cuando el delito de Prevaricato por Omisión solo admite la calidad de autoría porque va dirigida a un sujeto calificado como es el servidor público que ha omitido, retardado, rehusado o denegado un acto propio de su función.

Evoca que, frente a la omisión de las funciones del Mayor DELGADO HERRERA éstas se encuentran señaladas específicamente en la Resolución No. 05839 del 31 de diciembre de 2015 donde se define la estructura orgánica interna de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol por parte del Director General de la Policía Nacional, sin embargo, pretendió el Instructor justificar la omisión por parte del Oficial sobre lo dispuesto en el oficio S-2021- 001707-DISEC, el cual fue emitido por el Director de Seguridad Ciudadana a los Comandantes de los Departamentos para la ejecución de unas acciones administrativas encaminadas a la aplicación de la extinción de dominio y desalojo de viviendas destinadas al microtráfico mediante la coordinación con los Inspectores de Policía, porque allí según la lectura que hace el despacho estaban descritos los requisitos para proceder a la demolición de un inmueble por expendio de estupefacientes.

Sobre la medida de aseguramiento señala que debe existir prueba que lo justifique la cual no se acreditó dentro del proceso lo que quiere decir que no se sustentó el indicio grave de responsabilidad, el cual solo enuncia fundamentado en las declaraciones de la TC. ANA GABRIELA, ST. LUISA MORA y PT. DIEGO HERNÁNDEZ, así como de la diligencia de indagatoria del CT. BOTERO SÁNCHEZ, sin presentar valoración alguna, ni relación que permita establecer como construyó el indicio grave.

Con los argumentos expuestos señala que no procede la medida de aseguramiento porque no existe prueba de su responsabilidad, ni indicio grave, tampoco sustentó la necesidad toda vez que al respecto solo realiza meras enunciaciones sobre el peligro de que obstruya el debido ejercicio de la justicia y que el imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima, donde solo refiere la denuncia presentada por la ST. LUISA MORA sobre las amenazas recibidas a su celular y la información presentada por el apoderado de las víctimas sin establecer la relación directa de estos hechos con su prohiado.

No basta para sustentar la medida de aseguramiento con enunciar que su defendido es actualmente el Comandante de la Estación de Mosquera en Cundinamarca y más cuando las víctimas residen en la ciudad de Pereira, estando además bajo medidas de protección solicitada por el despacho, siendo además inocuo el sustento de los otros fines de la medida, sobre los cuales indica que se basan en que el comportamiento

del Mayor WILMAR DELGADO HERRERA se efectuó con dolo, poniendo en peligro a la comunidad por no verificar los requisitos de legalidad previos a la demolición del inmueble.

Adujo que, el juzgado se ha quedado corto al momento de fundamentar la necesidad de la medida, porque este criterio al igual que los demás requiere que se cumpla todos los fines de la misma, de los cuáles como ya se dijo no se cumplen por falta de inferencia razonable de autoría o participación derivada de los elementos de prueba relacionados, los cuales no fueron analizados en su momento para establecer tal relación.

Frente a la urgencia, el instructor no pudo demostrar que el Oficial podía obstruir la justicia cuando además de encontrarse los elementos materiales probatorios asegurados dentro del sumario, él laboraba en un municipio muy distante del lugar de los hechos y en una actividad de vigilancia que en nada está relacionada con los hechos que se le ha pretendido imputar de manera infundada.

Finaliza argumentando que la proporcionalidad, necesidad, idoneidad y mucho menos la razonabilidad estuvo fundamentada para imponer la medida de aseguramiento consistente en la Detención Preventiva solicitando que la misma se revoque de manera inmediata.

5.4- Doctor LUIS HENRY SILVA RODRÍGUEZ³³ defensor del CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ.

Arguyó principalmente el censor que el instructor no realizó una valoración probatoria en conjunto desconociendo el derecho de defensa y contradicción, en el mismo sentido carece de una inferencia razonable de autoría o participación sobre cada procesado, omitiendo el test de proporcionalidad, razonabilidad y demás aspectos necesarios para establecer la necesidad individual de privarlos de la libertad, pilares fundamentales sobre los cuales solicitó la revocatoria de la decisión objeto de este recurso de alzada y como consecuencia de ello, se decreta la libertad del señor CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ.

Para contextualizar sus fundamentaciones expuso el togado que el despacho realizó una valoración selectiva de los medios de prueba sin entrar al detalle frente a cada uno de los vinculados, omitiendo la relación de elementos que comprometen la presunta responsabilidad sobre cada uno de los delitos imputados realizando una mera argumentación subjetiva, toda vez que el togado realizó una línea de tiempo que inició con el error del arrostramiento al señor CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ del delito de FRAUDE PROCESAL.

Inicialmente señala que el Despacho Instructor desconoció: i) Lo obrante a folios 31 al 33 del

³³ Cuaderno copia No. 14 folio 2708 y ss.

cuaderno 1, donde se señala por parte de la Comandante de Seguridad Ciudadana la existencia de requerimiento de fecha marzo 15 de 2022, procedente del esquema de seguridad del Ministro de Defensa, solicitando apoyo y seguridad para la estadía en la ciudad de Pereira de dicha personalidad. ii) Las actividades realizadas por el CT. BOTERO fueron el día 16 de marzo de 2022 que solo consistieron en tomar contacto con Inspectores de Policía de la ciudad de Pereira, obtener copia de un acto administrativo que ordenaba la demolición y delegar unas labores de verificación a personal idóneo de su unidad conocedor del tema y la problemática de la ciudad, y iii). Que el Oficial no interfirió, ni intervino, ni participó en la elaboración de la Orden de Servicios No. 052 del 16 de marzo de 2022, así como tampoco suministró ningún tipo de información a la oficina de planeación de esa unidad policial y no tuvo contacto para esos días con los firmantes de dicho acto administrativo.

De igual forma advirtió que, para la formulación de imputación de este tipo penal de Fraude Procesal, el funcionario Instructor en su dinámica argumentativa y afán de calificar la situación jurídica, únicamente se refirió a que las diligencias testimoniales y documentales obrantes en el expediente demuestran el actuar del Oficial, indicando que a pesar de que él sabía que la Estrategia o Plan 1000 Días Contra el Microtráfico ya había perdido vigencia desde el 15 de marzo de 2022 y que no era posible darse el derribamiento del inmueble, continuó con el proceso dentro del cual desarrolló todas las labores

tendientes al cumplimiento de la orden emitida por el Mayor WILMAR DELGADO quien le delegó todo el cumplimiento.

Consideró el togado que, el instructor ha tergiversado los testimonios del MY. WILMAR DELGADO HERRERA, del SI. YUBER ALEXANDER RAMÍREZ CUCHIVAGUEN, SI RUTBER VEGA RAMÍREZ y del señor OSCAR ANDRES MARÍN RAVE, exaltando que el Capitán no obró de manera irregular, ni caprichosa sino en cumplimiento de la orden emitida por el MY DELGADO quien inicialmente le suministró la información de un inspector para que tomara contacto con él y determinara qué inmuebles estaban para demolición y representaran un foco de inseguridad, por tanto, esa interlocución con los inspectores no fue de manera irregular como erradamente lo pregona el funcionario instructor, pues de allí surgió el número de inmuebles para demolición, entre los cuales se halló el de la calle 11 No.5- 16, y que en esta verificación participaron los policiales antes mencionados.

Por otro lado, el togado no comparte la imputación realizada por el delito de Falsedad Ideológica de Documento Público a su prohiado, toda vez que su defendido en ningún momento el señor oficial ordenó, alteró, ni realizó montaje para la realización del tercer video y los que intervinieron en la realización de los videos fueron los funcionarios de COEST MEPER al mando de la señora ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN y como lo indica el señor PT. HERNÁNDEZ quien para la época de los hechos pertenecía a esta dependencia y

quien manifestó que él grabó algunas de las imágenes pero que tuvo que hacerle unos cambios por órdenes del CR. de la DIJIN, lo cual demuestra que no fue el CT. BOTERO quien ordenó la realización del video y mucho menos alterar la realidad frente al inmueble.

Por otra parte, frente al injusto de Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto señala que, de los medios probatorios obrantes en el proceso no se determinó ni siquiera en sede de indicio, que el señor CT. BOTERO SÁNCHEZ haya tenido algún tipo de participación en la ubicación e ingreso de habitantes de calle al sector, ello por cuanto la misma persona que realizó los videos manifestó que esta orden la dio el coronel de la DIJIN.

Por último, frente al punible del Empleo Arbitrario de la Fuerza Pública, consideró que el mismo compendio probatorio demuestra claramente que el señor CT. BOTERO en acatamiento de la orden impartida por su superior el MY. DELGADO, de ubicar un inmueble para demoler que reuniera las características del Plan 1000 contra el microtráfico, y encontrándose de permiso autorizado por la jefatura de la seccional para el día 16 de marzo de 2022 al no poder realizar personalmente la labor encomendada, se comunicó con el SI. RAMÍREZ CUCHIVAGUEN adscrito a la SIJIN MEPEP a quien solicitó hacer las labores de verificación en las direcciones de los inmuebles suministrados por el Inspector de Policía, este último, quien al encontrarse en la misma situación del señor CT. BOTERO

requirió esta verificación al señor SI. VEGA RAMÍREZ de la misma unidad.

Para la defensa las consideraciones realizadas por el Juez de Instrucción Penal Militar para proferir medida de aseguramiento no son de recibo por cuanto el despacho se acogió a la existencia de indicios, como premisa de responsabilidad para imponer la medida de aseguramiento a su prohijado, sin hacer manifestación, ni tener en cuenta los requisitos para la imposición de la medida y los fines de la misma, ni la necesidad estricta de su imposición, respondiendo ésta a la necesidad de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, asegurar la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir su fuga o la continuación de la actividad delictual y evitar la alteración de las pruebas y el entorpecimiento de la investigación, requisitos que brillan por su ausencia en el auto recurrido.

De igual forma el despacho instructor omitió realizar ese test de constitucionalidad frente a los postulados de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, sobre numerales 1 y 2 del artículo 466 de la ley 1407 de 2010, que a la letra establecen: i) Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia. ii) Que el imputado o acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima o de la fuerza pública.

Concluyó su libelo contentivo, afirmando que son tan frágiles las argumentaciones dadas por el instructor para decretar la medida de aseguramiento en contra de su defendido que además de lo ya señalado, omitió los requisitos formales para imponer dicha medida de aseguramiento, por lo que solicitó la revocatoria de la Detención Privativa de la Libertad, al no haberse realizado el juicio de proporcionalidad por el Despacho Instructor que demostrara que la medida impuesta es necesaria, urgente y proporcional para lograr sus fines.

5.5- Doctora LUZ MIRYAM ALCALÁ RODRÍGUEZ³⁴ apoderada del TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ.

Discrepó primariamente sobre el inicio de la investigación preliminar donde su prohiado no fue vinculado desde el inicio de la investigación siendo que la misma excedió los términos estipulados por la ley superando los 180 días, lapso en el que se practicaron pruebas sin su conocimiento, para posteriormente y de manera intempestiva ser llamado ante la justicia con orden de captura con fines de indagatoria.

Asevera que no existió una investigación integral de los hechos afectando el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia teniendo en cuenta varias irregularidades procesales, entre ellas que el auto de apertura de la investigación no cumplió con sus

³⁴ Cuaderno copia No. 14 folio 2766 y ss.

requisitos de ley toda vez que este debe estar fundamentado en algunos elementos probatorios sin que se haya notificado si quiera para su indagatoria, la cual una vez presentada también presentó irregularidades debido a que lo realizado de manera virtual no coincidía con el acta de la diligencia rendida por lo cual ésta debe ser nulitada.

A lo mencionado agregó que su defendido estuvo privado de la libertad con el argumento de la necesidad de resolver la situación jurídica sin que éste sea un argumento suficiente para coartar a una persona de su derecho a la libertad; respecto a las razones de inconformidad sobre el auto objeto del recurso manifestó inicialmente que los hechos o situación fáctica no se ajusta a los delitos endilgados a su defendido teniendo en cuenta que la imputación se realiza por haber asesorado o dictado apartes para la elaboración de la documentación que sirvió de sustento para la orden de demolición.

Adicionalmente manifiesta que el tipo penal enrostrado exige que el sujeto calificado extienda documento público con aptitud probatoria sobre el cual se consignó total o parcialmente la verdad, sin que en todo su pronunciamiento estableciera puntualmente el indicio grave y aun así bajo meras conjeturas y subjetividades se afectó la libertad del procesado.

En el mismo sentido se menciona someramente la conducta dolosa del procesado sin estructurar el cumplimiento de sus requisitos, careciendo además de

una exposición clara de los argumentos de la tipicidad objetiva y de la conducta sobre los elementos del tipo penal, siendo igualmente vacía la argumentación presentada sobre la antijuridicidad y la culpabilidad.

Frente al análisis probatorio resalta que éste debe ser integral sumado a que es indispensable para el delito endilgado, determinar puntualmente cual fue el documento que presuntamente extendió o alteró su defendido, debido a que fue este elemento el que permitió y sirvió de sustento para las demás situaciones que se derivaron para la demolición, tanto administrativas como operativas.

Respecto a la medida de aseguramiento y sus fines señala que la misma debe ser nulitada por falta de motivación siendo este un requisito de toda decisión judicial, sin que esta sea la excepción y más cuando se trata de la privación de un derecho, sumado a que enunció que su defendido puede obstruir la justicia y representar un riesgo para la comunidad o la víctima sin presentar pruebas que demuestren esta afirmación que puede significar un perjuicio para su buen nombre.

Al respecto consideró además que no está fundamentado el criterio de necesidad de la imposición de la medida vulnerando los derechos de libertad personal, presunción de inocencia y debido proceso, solicitando en su recurso de alzada que se revoque de manera inmediata la medida de aseguramiento en contra de su defendido, que se vincule a la investigación a la

señorita ST. LUISA MARÍA MORA RINCÓN y que se practiquen las pruebas necesarias por parte del Juzgado en pro de los investigados y en respeto al principio de investigación integral allegando además las pruebas que establezcan la intimidación y obstrucción por parte de su prohiado sobre las víctimas en esta investigación.

5.6- Doctor DIEGO FERNANDO MARÍN MONTOYA³⁵ representando al SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ.

Centró sus argumentos de inconformidad sobre el auto mediante el cual se resolvió situación jurídica de su prohiado utilizado como fundamento principal el testimonio del PT. CORREDOR GRANDA JUAN PABLO y la prueba documental obrante a folio 1298 y 1299 para demostrar el indicio grave de responsabilidad y la autoría del delito, sin embargo en un análisis de los medios probatorios testimoniales que reposan en el plenario realizado por el censor sobre la declaración del mismo patrullero, se permite resaltar que se puede deducir lo contrario a lo dicho por el Juez de Instrucción.

Aseguró el A quo que la carpeta de la que fue acusado su representado de ocultar y destruir, nunca existió, nunca le fue entregada, en el mismo sentido tampoco es dable afirmar que la carpeta en mención se hubiese creado entre el 16 y 17 de marzo de 2022 teniendo en cuenta que el SI. VEGA RAMÍREZ no tuvo relación alguna

³⁵ Cuaderno copia No. 14 folio 2748 y ss.

con el inmueble ya que para esa fecha fue el PT. CORREDOR GRANADA quien recibió sus funciones, encontrándose entonces en el Grupo de Homicidios, siendo que la única actuación que realizó sobre los hechos materia de investigación fue desplazarse hasta la vivienda para tomar unas fotos y videos de la parte externa y dar trámite a un documento ordenado por el TE. PERALTA y el CT. BOTERO.

Tampoco es dable que el Despacho afirme la existencia de la carpeta con la existencia de un oficio donde se informa que la carpeta no existe en los archivos físicos de la unidad policial, lo que quiere decir que el indicio de responsabilidad creado por el Instructor no existe y en el mismo sentido obvió los requisitos dispuestos por la ley para imponer medida de aseguramiento, sin verificar además los elementos del tipo objetivo los cuales claramente no están dados en el presente caso.

Además del inexistente indicio grave, el Juez de Instrucción no realizó ningún estudio sobre los requisitos expuestos en la ley 1407 de 2010 artículo 466, es decir sobre los criterios de ponderación, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad para imponer la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, toda vez que solo fueron enlistadas en el auto sin un juicio razonable de los medios de convicción, lo que genera como consecuencia que su decisión sea ilógica e irracional, atribuyendo equivocadamente que las situaciones de inseguridad sobre las víctimas y testigos en el proceso son un

argumento necesario y razonable para privarlo de la libertad.

Uno de los argumentos utilizados para imponer la medida fue brindado por el MY. DELGADO al referir que este tipo de conductas se han realizado anteriormente en los demás procedimientos, sin embargo, esta manifestación no fue bajo juramento, y no especifica cuál de las conductas es la que realizan o si fue aquella que le es imputada a su poderdante, aseverando demás que no hay otra medida que sea suficiente para aplicarle, por lo que concluye que el Juez no ponderó los elementos propios que consagra la ley para imponer la privación de libertad como medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que esta aplica como última ratio, del estudio minucioso del compendio probatorio y el cumplimiento estricto de sus formalidades.

Sobre la proporcionalidad resalta que su defendido estuvo solo por el día 16 de marzo de 2022 cubriendo las funciones del PT. CORREDOR por lo que no es conocedor de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes como aseguró el Despacho Instructor, simplemente fue utilizado por los oficiales PERALTA y BOTERO para tomar unas fotos y videos, de igual manera no se puede perder de vista que por su grado y jerarquía el SI. VEGA debía simplemente ejecutar las órdenes impartidas por el Coronel, Mayor, Capitán y Teniente, siendo improcedente la mencionada urgencia de imponer la medida argumentando que para el momento de la captura era el "comandante de la Estación de Policía Mosquera".

Pretende el apelante con su escrito que la Segunda Instancia revoque la medida de aseguramiento y como consecuencia se conceda la libertad inmediata de su defendido.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuradora 3 Judicial Penal II -Dra. ROSA EUGENIA BENVIDES DÍAZ-, resalta inicialmente que se observa una causal de nulidad que consiste en la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y la violación al derecho de defensa teniendo en cuenta que el A quo hace alusión a la ley 1407 de 2010 y ley 906 de 2004 las cuales no son aplicables al caso sub examine, en el mismo sentido referencia que no son suficientes los argumentos señalados a efectos de imponer la medida de aseguramiento debido al carente estudio sobre sus fines constitucionales.

Es así que la fundamentación utilizada por el Juez de Instrucción no cuenta con el análisis requerido sobre el material probatorio, ni fueron desarrolladas congruentemente para establecer la materialidad de las conductas punibles endilgadas sobre cada uno de los investigados; citando algunos ejemplos concreta la idea principal en que para imponer medida de aseguramiento basta un indicio grave, sin embargo, olvidó el instructor que su argumento no puede construirse con citas puntuales, sino que se desprende

de un estudio general sobre todo el compendio probatorio.

De igual manera hace alusión al argumento utilizado para fundamentar la obstrucción a la justicia donde alude las amenazas de las que han sido víctima los testigos, puntualmente la ST. LUISA MARÍA MORA, criticando enfáticamente si tal argumento puede ser utilizado para imponer la medida que privó de la libertad a todos los procesados simplemente por ser investigados en el presente proceso.

En los mismos términos se refirió al sustento utilizado para proteger la sociedad, toda vez que el argumento se centra principalmente en el cargo, la antigüedad y por ser miembros activos de la Policía Nacional, concluyendo que para este caso procede la nulidad solicitada por la motivación deficiente, imprecisa y sin análisis probatorio, puntualizando que en temas de libertad esta decisión no cumplió con los requisitos formales exigidos por la ley lo que desconoce los derechos de los procesados al debido proceso y al derecho de defensa.³⁶

VII. DE LA COMPETENCIA

Esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación cuya resolución concita la atención de la Sala Primera de Decisión en el presente evento, ello de conformidad con lo establecido en el

³⁶ Cuaderno copia No. 16 folio 3109

artículo 238.3 de la Ley 522 de 1999, normatividad que en punto a la ritualidad procesal ha venido siendo aplicada tanto respecto de procesos penales por hechos acontecidos con anterioridad al 17 de agosto de 2010, fecha de entrada en vigencia el Código Penal Militar de éste año³⁷, como de los ocurridos con posterioridad a la misma por encontrarse vigente en el ordenamiento jurídico Colombiano el Código Penal Militar de 2010, Ley 1407, mismo que resulta aplicable al caso *sub iudice* dada la fecha de ocurrencia de los hechos materia de investigación en lo que corresponde a los aspectos sustanciales y algunos procesales de contenido sustancial mientras se produce en la jurisdicción foral la implementación sucesiva del sistema acusatorio en los términos del título XIX de la última de estas codificaciones, y además dada la naturaleza procedimental de la presente causa penal, la etapa en que se encuentra y lo preceptuado por el artículo 628 del código de 2010³⁸.

En el mismo sentido es necesario precisar que las consideraciones de esta decisión abordarán únicamente las hipótesis de los impugnantes planteadas en las apelaciones, conforme al principio de limitación impuesta por el artículo 583 del código de 1999; sin embargo, la competencia se extenderá también, a

³⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Autos mayo de 2011, radicado 36412; junio 22 de 2011, radicado 36737, noviembre 08 de 2011, radicado 37797; y marzo 07 de 2012, radicado 38401.

³⁸ Ley 1407 de 2010, artículo 628, "Derogatoria y vigencia. La presente ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al régimen de implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999 y las normas que lo modifiquen." (Destacado de la Sala).

aquellos temas inescindibles al problema jurídico planteado en el recurso.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Si bien esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por los abogados HÉCTOR ALIRIO BOHÓRQUEZ SUÁREZ, CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI, DIEGO ABDÓN TAMAYO GÓMEZ, LUIS HENRY SILVA RODRÍGUEZ, LUZ MYRIAM ALCALÁ RODRÍGUEZ, y DIEGO FERNANDO MARÍN MONTOYA, en representación de los policiales CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ; y SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ, respectivamente; en contra del interlocutorio adiado 04 de abril hogaño, mediante el cual por parte del Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial, en cabeza del MY. HERNANDO MANRIQUE SOTO, impuso en contra de los aquí investigados medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, al sindicarlos de la comisión de los presuntos punibles de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, PREVARICATO POR OMISIÓN, FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO; Y OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, sería del caso entrar a desatar los recursos de alzada, si no fuera porque esta Primera Sala de Decisión observa que en el interlocutorio motivo de impugnación, afloran causales de nulidad que como remedio extremo imponen su declaratoria, como pasará a precisarse.

La nulidad se encuentra patente, como bien lo plasmó en su concepto de rigor la doctora ROSA EUGENIA BENAVIDES DÍAZ en su condición de Procuradora 3 Judicial II Penal de Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado de esta ciudad, en punto a la falta de motivación de la decisión recurrida en la que no se estructura adecuadamente el indicio requerido para resolver la situación jurídica de los procesados imponiéndoles medida de aseguramiento; y menos motiva las circunstancias del porqué se estructuran los requisitos para imponer medida de aseguramiento de detención preventiva con base en los fines constitucionales invocados, -que estimó acudían en cabeza de los investigados- razones por las cuales la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los argumentos expuestos en las apelaciones, amén que la pretensión de los impugnantes quedaría satisfecha, dado que la nulidad abarcará en su totalidad la decisión motivo de reproche.

8.1- De la Definición de Situación Jurídica.

Sea lo primero recordar, que el fin y la función del proceso penal se dimensionan a partir del modelo de Estado y el fin de un Estado Social Democrático de Derecho como el colombiano, implica que, dentro de la causa penal el funcionario obtenga la verdad histórica, logre el restablecimiento del derecho, pero a partir del respeto por las garantías fundamentales de los intervinientes, entre otros, el debido proceso.

En el marco de aquel³⁹ se desarrolla una controversia o debate procesal, el cual contiene unos criterios en su trámite, a los cuales debe ajustarse tanto el juez como los sujetos procesales, y bajo tal entendido, al apelante en ejercicio de la garantía del derecho de contradicción le implica el deber de reunir los presupuestos de la impugnación, iniciando por la capacidad jurídica para interponer el recurso, su interés jurídico⁴⁰, la sustentación⁴¹ y la oportunidad para presentarlo.

³⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, (13 de Julio de 2005). Rad. 22764 [M.P. Mauro Solarte] "...El artículo 29 de la Constitución Política consagra, como no podía ser de otra manera, el derecho fundamental al debido proceso y lo edifica sobre la base de que el conflicto debe ser decidido por un juez creado previamente al acto que se imputa, observando las formas propias de cada juicio - cuando de materias penales se trata -, para lo cual es esencial que se garantice la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

El núcleo del derecho al debido proceso gira, entonces, en derredor de las garantías penales y procesales que a la hora de ahora ningún estado civilizado podría desconocer. Este tipo de garantías, pero entre ellas las de allegar pruebas y controvertirlas y de impugnar las decisiones adversas, como manifestación del derecho de defensa, no son patrimonio exclusivo del derecho penal, sino de la totalidad del sistema procesal, como se infiere de la exigencia según la cual el debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

⁴⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (1° de julio de 2009). Rad. 31763, [M.P. Augusto Ibáñez], "...interés jurídico para recurrir o legitimación en la causa, se requiere no sólo que la parte o el interviniente se encuentran autorizados por la ley para recurrir, sino que con la providencia motivo de la impugnación se les hubiese ocasionado un daño, un perjuicio. Si, por el contrario, la decisión no le causa ningún agravio no puede importarles su contenido al extremo de pretender su revocatoria y, en consecuencia, una pretensión con ese alcance está llamada al rechazo."

⁴¹ Corte Constitucional (18 de marzo de 2003). C-234. "Si la apelación es una faceta del derecho de impugnar, que significa combatir, contradecir, refutar, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; es decir, presentar el escrito por el cual mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación.
(...).

Actualmente rige un sistema de sustentación en Primera Instancia, en virtud del cual la persona debe dar sus argumentos dentro de los términos legales que se establecen y en caso de no darlos, se entiende que se ha desistido y el recurso se declara desierto".

Pero para que el sujeto procesal pueda ejercer el derecho de contradicción, indispensable resulta que el funcionario judicial al emitir su fallo, lo haga valorando las pruebas sobre las que edifica la decisión y dando la calificación jurídica a los hechos, al igual que determinando la situación jurídica del procesado, es decir, presentando los fundamentos legales concretos que sustentan su decisión y la resolución que corresponde⁴², solo así, se le podrá garantizar a aquellos el derecho de defensa materializado en este caso a través de los recursos o sencillamente, que el sujeto tenga el cabal conocimiento sobre los fundamentos de la providencia⁴³, en otras palabras, esto se traduce en la garantía de las formas propias del juicio⁴⁴. De manera que se ha de afirmar que la motivación de las providencias no se satisface con la simplicidad formal de enunciar la decisión sin conocer los fundamentos⁴⁵.

⁴² Ley 522 de 1999, artículo 336.

⁴³ Ferrajoli Luigi. (2000), Teoría del Garantismo Penal, Prólogo de Norberto Bobbio, (p. 623.), "Se entiende, después de todo lo dicho, el valor fundamental de este principio, que expresa, y al mismo tiempo garantiza, la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio, vinculándolo en derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria. (...) Precisamente, la motivación permite la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho, por violación de ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y pruebas"

⁴⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (5 de junio de 2003.). Rad. 19689, [M.P. Alvaro Pérez]

⁴⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (22 de mayo de 2003.). Rad. 20756, [M.P. Marina Pulido]. "El deber de motivar no se satisface con la simple y llana expresión de lo decidido por el funcionario judicial, pues menester resulta la indicación clara, expresa e indudable de su argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los sujetos procesales, a la vez que se hace efectivo el principio de imperio de la ley, esto es, de sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico."

De otro lado, en el caso *sub júdice*, se ha de analizar si en el interlocutorio de calenda 04 de abril hogaño se salvaguardó la garantía procesal de la motivación en las decisiones judiciales, y tratándose de un auto de definición de situación jurídica en él, se le debe informar a los vinculados la denominación de los tipos penales que se les atribuye por los hechos imputados sobre la base de la valoración probatoria, y así, preservarle el derecho de contradicción como garantía del debido proceso.

Esta reflexión implica entonces afirmar que la definición de situación jurídica no es una mera decisión sobre la libertad o la detención del sindicado⁴⁶, es decir, no se circunscribe única y exclusivamente a determinar si se impone o no medida de aseguramiento. Ante ello es preciso traer a colación desde ya, alguna reflexión que nos enseña la Doctrina:

"...De tiempo atrás la Corte Constitucional ha reconocido que la imposición de medida aseguramiento implica una fuerte tensión de principios constitucionales que se estructura conforme a la siguiente ecuación: sin responsabilidad no hay privación o afectación de la libertad vs necesidad de privación, o limitación del mencionado derecho durante la investigación. Normativamente esta ecuación se apoya en los derechos a la libertad personal (art. 28 C.N.) y a la presunción de inocencia (art.29 C.N.) y, por otro lado, en las condiciones y reglas para autorizar la afectación de la

⁴⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, (11 de diciembre de 2003). Rad. 19547 [M.P. Jorge Aníbal Gómez].

libertad personal y en la eficacia del sistema de justicia, como también en la protección de los derechos de la comunidad y de las víctimas.

Una visión absoluta de los extremos en tensión haría inaplicable el sistema de justicia penal y pondría en serias dificultades al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales. En efecto, pretender el carácter absoluto de la libertad personal en conjunción con la presunción de inocencia impediría al Estado, en muchas ocasiones, hacer efectiva la sanción o evitar que la persona investigada obstruya la justicia o impedir que continúe la afectación de los derechos de la víctima. De manera contraria, asumir que siempre es necesario limitar la libertad personal supondría que simples sospechas, sin respaldo alguno, o la sola denuncia constituirían fundamento suficiente para adoptar una medida con la consecuente imposibilidad de goce de la libertad.

Tal y como lo ha interpretado la Corte Constitucional⁴⁷, la carta diseñó un sistema de equilibrio para resolver esa tensión, porque está construido sobre la base de normas con estructura de principios, los cuales ofrecen un espectro de interpretación y aplicación más amplio que debe valorarse en el caso concreto. En consecuencia, no se parte de una regla rígida en cualquiera de los extremos. En la sentencia C-327 de 1997 la Corte recogió esta idea en los siguientes términos:

(...) aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de ser de ese

⁴⁷ Corte Constitucional sentencias C-327 de 1997 MP Fabio Morón Díaz; C-774 de 2001 MP Rodrigo Escobar Gil; C-805 de 2002 MM. MP. Manuel José Espinosa y Eduardo Montealegre en lynett, entre otras.

carácter y, por tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que operen la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica contribuyen a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo.

Hasta la expedición del acto legislativo 03 de 2002, de la Constitución no tenía un esquema completo y preciso en torno de la afectación de la libertad durante la investigación, razón por la cual la Corte Constitucional infirió, de las disposiciones contenidas en la Carta Política, los supuestos y casos en que el constituyente autorizaba la afectación o privación de la libertad durante la investigación penal⁴⁸. El nuevo diseño constitucional como se analizó en el primer tomo de esta obra, y redefinió por completo este equilibrio para fijar un esquema preciso de limitaciones a la libertad personal durante la investigación o trámite del proceso. En la actualidad, solo podrá limitarse la libertad cuando ello resulte necesario "para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas", según lo dispone el numeral primero del artículo 250 superior.

Esta definición constitucional de las causas que autorizan la afectación de la libertad personal no utilizó la adopción de reglas para precisar los casos en que procede la limitación del mencionado derecho fundamental.

⁴⁸ En la sentencia C-774 de 2001 MP Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional hizo un análisis de las distintas hipótesis en que resultaba legítima la afectación de la libertad durante la investigación.

Corresponde, en consecuencia, al legislador delimitar el contenido o las condiciones en las cuales se estima que existen dificultades para asegurar la comparecencia, la conservación de la prueba o la protección de la comunidad y las víctimas. La interpretación del esquema legislativo debe guiarse en todo caso, por el respeto al mandato de proporcionalidad implícito en la disposición constitucional.

En abstracto, el legislador solo define hipótesis en las cuales podrá considerarse necesaria la medida, por lo que tal necesidad deberá ser valorada en el caso concreto. Ello se explica por elementales principios de hermenéutica constitucional, que enseñan que la restricción a un derecho fundamental debe estar justificada, esto es, debe resultar proporcionada. En consecuencia, está proscrita la aplicación automática de los criterios de autorización para la afectación de la libertad personal:

(...)la detención preventiva dentro de un Estado social de derecho no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir, que su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de las personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la presunción de inocencia) y promover el respeto de la dignidad humana...⁴⁹.

⁴⁹ Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett, El Proceso Penal Estructura y Garantías Procesales, Universidad Externado de Colombia, Tomo III, Sexta Edición, Págs. 519, 520

Ahora bien, el punto neurálgico de este tipo de decisiones se materializa en la estructuración del indicio grave de responsabilidad que implica la valoración del injusto culpable o si se quiere, la determinación sobre la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable y si alguno de estos estadios no se configura, no se estructura el indicio grave requerido.

En coherencia con lo anterior se ha de agregar que en el interlocutorio que contiene la definición de situación jurídica y la determinación de imponer o no medida de aseguramiento, ha de reunir *grosso modo* la estructuración de tres presupuestos, uno subjetivo (el indicio grave de responsabilidad), uno objetivo (la determinación legal), y los fines de la medida.

En cuanto al elemento subjetivo, se configura en la constatación sobre la existencia probatoria que permita construir un indicio grave de responsabilidad, en punto específico sobre la autoría o participación de aquél sujeto a quien se le atribuye la realización de una conducta y consecuente con ello, se le imputa la comisión del delito⁵⁰, es decir, se califica provisionalmente su situación jurídica.

⁵⁰ Ley 522 de 1999, Art. 522 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y REQUISITOS SUSTANCIALES. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

Ley 522 de 1999, Art. 523. REQUISITOS FORMALES. Las medidas de aseguramiento se dictarán en virtud de auto interlocutorio en que se exprese:
1. Los hechos que se investigan, su calificación provisional y la pena correspondiente.

En cuanto al elemento objetivo, entendido éste, como la verificación de la medida de aseguramiento que la ley procedimental ha dispuesto según el delito que se trate y de hacer referencia a la detención preventiva como medida de aseguramiento, los presupuestos señalados se refieren a los eventos, i) cuando el delito tenga pena prevista de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años, ii) cuando el delito atente contra el servicio o la disciplina, iii) cuando se haya realizado captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión, y iv) en aquellos casos en que el procesado se abstenga de otorgar caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la imposición de la medida.

Estas variables son ordenamiento expreso de la norma y evitan la arbitrariedad del juez al momento de decidir si impone o no restricción de la libertad, causales con las que el legislador protege las condiciones y régimen de libertad del justiciable.

El tercer elemento consiste en la verificación de los fines de la medida de aseguramiento que si bien, no están expresamente consagrados en la ritualidad procedimental militar de corte inquisitivo⁵¹, sí están consagrados en la ley procesal militar de corte

2. Los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable responsabilidad como autor o partícipe.

3. Las razones por las cuales no se comparten los alegatos de los sujetos procesales.

⁵¹ Ley 522 de 1999

acusatorio⁵², y bajo una interpretación sistemática desde el ordenamiento constitucional⁵³, resulta imperativa la verificación de aquellos, según los requisitos dispuestos en la norma para su imposición⁵⁴.

El legislador decantó los fines por los que debe propender la medida de aseguramiento así, i) impedir que el imputado pueda transformar o desfigurar el recaudo probatorio o dificulte este último ejercicio por parte del investigador⁵⁵; ii) evitar nuevas y

⁵² Ley 1407 de 2010

⁵³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, (21 de abril de 2004). Rad. 22188 [M.P. Alfredo Gómez] "...En las anteriores condiciones, siendo el derecho a la libertad uno de aquellos de naturaleza fundamental y de consagración constitucional y que por ende se predica de todas las personas, procesadas ante cualquier jurisdicción, su afectación no podría tener un sustento diverso al que constitucionalmente se le ha señalado de acuerdo con lo transcrito, por ello, también la detención preventiva que se decreta en la Justicia Penal Militar debe someterse a los fines previstos en la Carta así en su ordenamiento específico, esto es en el Código Penal Militar no se le haya deferido un desarrollo legal, pues en dicho evento no podría hablarse de una integración legislativa con el Ordenamiento Procesal Penal Ordinario, sino simplemente del sometimiento de la medida a las previsiones de la Constitución Política".

⁵⁴ Ley 1407 de 2010, Art. 466, REQUISITOS. El juez penal militar de control de garantías, a petición del Fiscal Penal Militar, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el indiciado o acusado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado o acusado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima o de la fuerza pública.
3. Que resulte probable que el imputado o acusado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

Ley 1407 de 2010, Art. 468. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley no exceda de dos (2) años, satisfechos los requisitos sustanciales y de necesidad de la medida, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas.

⁵⁵ Ley 906 de 2004, Art. 309. OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir,

futuras agresiones a los intereses de la comunidad, de la víctima o de la Fuerza Pública⁵⁶, y iii) que la restricción de la libertad tendría el propósito de asegurar la comparecencia del imputado al proceso y garantizar al mismo tiempo la ejecución de la pena en caso de una sentencia de carácter condenatorio⁵⁷.

En suma, los presupuestos anteriormente enunciados, requeridos para definir la situación jurídica y determinar la imposición de medida de aseguramiento o no-, se inician por la construcción del indicio grave de responsabilidad (elemento subjetivo), y posterior

impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

⁵⁶ Ley 906 de 2004, Art. 310. PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. Para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

Ley 906 de 2004, Art. 311. PELIGRO PARA LA VÍCTIMA. Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes.

⁵⁷ Ley 906 de 2004, Art. 312. NO COMPARECENCIA. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.

a ello establecer la necesidad⁵⁸ de la medida mediante la determinación del fin que se persigue con su imposición; fijado ello, se procede a acatar el criterio objetivo, es decir, la medida en general que la ley ha dispuesto para el tipo penal que se investiga (privativa o no de la libertad), y por último del abanico de aquellas según sea el caso, se debe seleccionar la medida que se impondrá, según resulte adecuada, proporcional y razonable.

Por lo anterior, la definición de situación jurídica no se reduce a la determinación sobre la imposición o no de medida de aseguramiento, sino que ella debe comprender la precisión de la calificación jurídica que se desarrolla por vía del indicio y también decide, sobre la imposición o no de la misma, la cual requiere en su valoración, además del indicio grave de responsabilidad, la valoración del criterio objetivo y la determinación de los fines, aclarando que la definición de situación jurídica es provisional o mutable, dependiendo del devenir procesal.

8.2- De la Falta de Estructuración del Indicio.

En el interlocutorio motivo de reproche, al resolver la situación jurídica de los indagados no se motivó

⁵⁸ Corte Constitucional, (9 de abril de 2008). Sentencia C-318 [M.P. Jaime Córdoba] "En virtud de la necesidad las medidas sólo pueden imponerse si concurre algunos de los fines que las justifican como son los de asegurar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad con énfasis en las víctimas. En razón de la gradualidad el juez debe elegir, entre el abanico de posibilidades que le suministra la ley, aquella que resulte más adecuada a los fines de la medida, atendidas las circunstancias personales, laborales, familiares y sociales que rodean a su destinatario, así como las particularidades del caso."

la estructuración del indicio grave de responsabilidad, afirmación a la que llega la Sala, por las razones que a continuación se expondrán respecto de cada uno de los investigados, así:

Del CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ.

En lo atinente al indicio grave de responsabilidad en su contra, señaló que aquel se desprende:

"de las pruebas obtenidas en el proceso, declaraciones bajo la gravedad de juramento de la Subteniente LUISA MORA, del Patrullero DIEGO HERNANDEZ y la diligencia de indagatoria del señor Capitán HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ quien bajo la gravedad de juramento aseveró que el señor Coronel García Suárez fue quien dio la orden de alterar la realidad de los videos e ingresar a la vivienda consumidores y habitantes de calle con el fin de simular el consumo de sustancias estupefacientes.

*Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por los punibles de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Coronel CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ a título de dolo."*⁵⁹.

Respecto del MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, encontró el indicio grave de responsabilidad en:

"las pruebas obtenidas en el proceso, declaraciones bajo la gravedad de juramento de la subteniente LUISA MORA, del Patrullero DIEGO HERNANDEZ, de la Teniente Coronel Ana Gabriela quienes bajo la

⁵⁹ Cuaderno copia No. 12 folio 2292.

gravedad de juramento aseveraron que el señor Mayor Bohórquez Salcedo fue quien dio la orden de alterar la realidad de los videos ingresando a la vivienda consumidores y habitantes de calle con el fin de simular el consumo de sustancias estupefacientes, además fue quien valido los videos que fueron soporte de dicha demolición.

Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por los punibles de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Mayor BOHÓRQUEZ SALCEDO a título de dolo."⁶⁰.

En punto al también MY. WILMAR HERRERA WILMAR, estimó que se derivaba en su contra el indicio requerido:

"de las pruebas obtenidas en el proceso, declaraciones bajo la gravedad de juramento de la TC. ANA GABRIELA, Subteniente LUISA MORA Y del Patrullero DIEGO HERNANDEZ y la diligencia de indagatoria del señor Capitán HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ, quienes muestran de manera clara la omisión en el cumplimiento de las funciones del señor Mayor DELGADO HERRERA.

Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por el punible de PREVARICATO POR OMISIÓN, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Mayor WILMAR DELGADO HERRERA a título de dolo."⁶¹.

En lo referente al indicio grave de responsabilidad en contra del CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, consideró que el mismo:

⁶⁰ Cuaderno copia No. 12 folio 2323.

⁶¹ Cuaderno copia No. 12 folio 2359 y 2360.

"se desprende de todo el plenario probatorio que se despliega en la presente investigación ya que todas son unívocas y coincidentes de que quien dio la orden de búsqueda al personal de la SIJIN, fue el señor Capitán Botero Sánchez.

Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por los punibles de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Capitán Sánchez Botero a título de dolo."⁶².

En lo que tiene que ver con el TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ consideró que:

"ese indicio grave de responsabilidad se desprende de las pruebas obtenidas en el proceso, declaraciones bajo la gravedad de juramento de la TC. ANA GABRIELA, Subteniente LUISA MORA, del Patrullero DIEGO HERNANDEZ, PT. CORREDOR GRANADA JUAN PABLO y la diligencia de indagatoria del señor Mayor WILMAR DELGADO HERRERA.

Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por el punible de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Teniente JARRIXON PERALTA SANCHEZ a título de dolo..."⁶³.

Por último, con relación al procesado SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ, estimó que el indicio grave de responsabilidad se encuentra en:

⁶² Cuaderno copia No. 12 folio 2354.

⁶³ Cuaderno copia No. 12 folio 2380.

"las pruebas obtenidas en el proceso, declaraciones bajo la gravedad de juramento del Patrullero CORREDOR GRANADA JUAN PABLO, y la prueba documental obrante a 1298-1299.

Así las cosas, para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por el punible de OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, sin que medie justificación alguna ante la conducta asumida por el señor Subintendente RUTBER VEGA RAMÍREZ a título de dolo." ⁶⁴.

Como acaba de verse, del contenido reseñado no es posible hallar una valoración probatoria en punto a establecer una hipótesis sobre la estructuración de un indicio grave de responsabilidad en cabeza de cada uno de los procesados y por cada uno de los punibles enrostrados; recuérdese que en las hipótesis hay contenidos de reglas de experiencia aplicadas al hecho indicador, para establecer la inferencia lógica que nos permita llegar al hecho indicado; toda vez que como puede apreciarse con facilidad en la decisión confutada, erróneamente se pretende reemplazar ese silogismo por conjeturas insustentadas.

Adicional a lo anterior, la estructuración del indicio requiere una valoración en sede de tipicidad y en tal sentido, la simplicidad de la conjetura señalada en el interlocutorio en punto a que el indicio lo deriva de declaraciones bajo la gravedad del juramento y ya por eso se tiene la estructuración del mismo, como

⁶⁴ Cuaderno copia No. 13 folio 2402.

bien lo anotara la señora Representante del Ministerio Público en su concepto, al considerar que:

*"si bien, para efectos de imponer medida de aseguramiento basta "un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.", también lo es, que el mismo no se puede construir a partir de citas puntuales, en particular, de los testimonios, desconociendo el contexto mismo en que la afirmación del testigo se hubiese producido."*⁶⁵

Asimismo, afirmó el funcionario A-quo, que la medida de aseguramiento es procedente porque existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra de los investigados por la totalidad de los punibles que se les atribuye, sin precisar cuáles son los otros indicios, dejando en la indeterminación a la defensa para siquiera controvertirlos. Es que se itera, no es suficiente con mencionar el hecho que considere como probatorio para su fin perseguido, se requiere que además de ello el operador judicial haga un ejercicio dialéctico de lo que recibe como hecho indicador frente a las pruebas obtenidas, para de ello derivar si se ha construido el indicio que requiere el operador, pero además que ese indicio sea de tal gravedad que atienda los parámetros legales para la afectación de una medida tan drástica como es la privación de la libertad conocida como medida de aseguramiento.

En suma, se requiere que el indicio contenga una valoración en sede de antijuridicidad, pero la

⁶⁵ Cuaderno copia No. 16 folio 3112.

simplicidad de las frases contenidas en el interlocutorio no satisface este presupuesto de responsabilidad en grado de posibilidad, y menos cuando se limita a señalar sin más que no media justificación alguna por la conducta asumida.

De la misma forma, el indicio de responsabilidad también debe contener una valoración desde la culpabilidad, sin embargo, el interlocutorio tiene una orfandad absoluta sobre este tema, pues se limita a mencionar que la comisión de los punibles fue a título de dolo, pero no da cuenta con base en qué argumentos arribó a tal conclusión, limitándose a mencionar que los comportamientos fueron ejecutados *"con dolo directo de primer grado"*.

Lo anterior nos lleva a concluir entonces que en la dialéctica argumentativa para estructurar el indicio, se debe expresar fáctica y jurídicamente tanto la construcción de la tipicidad como de la antijuridicidad y por supuesto la valoración de la culpabilidad; y son precisamente estos presupuestos los que están ausentes en el interlocutorio que resolvió la situación jurídica; razones simples pero suficientes para señalar la ausencia de motivación en cuanto al indicio grave de responsabilidad, que presupone la determinación de la calificación jurídica que se le está imputando a los indagados desde premisas fácticas y jurídicas, como presupuesto necesario para resolver la situación jurídica.

8.3- De la Nulidad Procesal por Afectación al Debido Proceso.

La falta de motivación del interlocutorio fechado 04 de abril hogaño, al no especificar los presupuestos fácticos y jurídicos que suponen estructuran la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad grado de posibilidad de la conducta imputada, genera la dificultad por parte de los sujetos procesales de presentar su antítesis, es decir, impide el ejercicio del derecho de contradicción y esa vulneración implica a su vez afectación tanto del debido proceso como el derecho de defensa. En ese sentido se ha de señalar que se configura la causal segunda de nulidad contenida en el artículo 388 de la Ley 522 de 1999 que a la letra dice, *"la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso"*.

Además de la falta de motivación, se advierte una motivación anfibológica que de cara al punible de fraude procesal se reclama, en punto que da cuenta de una parte, que la actuación de los aquí procesados se encaminó a realizar maniobras engañosas para lograr el derribamiento de la edificación, cuando lo que señala la prueba es que del citado inmueble, por acta 2021-531/R-15-2021-365 del 27 de septiembre de 2021⁶⁶ se ordenó su desalojo y se impuso la medida correctiva de demolición; la cual se dispuso fuera hecha efectiva por el Inspector 15 Municipal de Policía de la ciudad de Pereira el 15 de marzo de 2022 a las 09:00 horas

⁶⁶ Cuaderno copia No. 3 folio 428 a 441.

según comunicación dirigida al señor ARMANDO SÁNCHEZ familiar de la propietaria, el 14 del citado mes y año⁶⁷.

Conforme a lo anterior, se tiene que tal actividad ya estaba ordenada previamente a la actuación de los aquí investigados, aquello, conforme a lo decidido al interior de un proceso verbal abreviado tramitado en la Inspección Municipal de Policía de la ciudad de Pereira, y no por problemas relacionados con el microtráfico sino por "amenaza de ruina"⁶⁸.

De otra parte, lo que torna el análisis en ambiguo, es que por el funcionario A-quo se quiere dar a entender también que el acto administrativo al que al parecer fue inducido por error el servidor público, fue la orden de servicios No.052 del 16 de marzo de 2022 al asegurar "que a la luz del derecho es un acto administrativo de carácter operacional"⁶⁹; siendo que lo único evidente hasta este momento procesal es que en uno u otro caso no se determinó cuál era el carácter de "contrario a la ley" del mismo, ingrediente normativo que demanda el tipo penal en cita para su estructuración⁷⁰; amén que no corresponde a la jurisdicción penal, ni penal militar calificar de contrario a la ley un acto administrativo, competencia que radicada en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, por tanto tales actos gozan de presunción de acierto y legalidad hasta tanto no sean

⁶⁷ Cuaderno copia No. 3 folio 427.

⁶⁸ Cuaderno copia No. 12 folio 2280.

⁶⁹ Cuaderno copia No. 12 folio 2280.

⁷⁰ Cfr. Código Penal, artículo 453.

declarados nulos por la autoridad competente, conforme lo prevé la ley⁷¹ y por las causales allí taxativamente señaladas.

De lo anterior resulta claro que si se refiere a la demolición ordenada por la inspección municipal de policía, tal decisión ya había sido decretada desde muchos meses atrás, por lo que ninguna injerencia podía tener en esa decisión el hecho que se hubiera expedido la citada orden de servicios, que tiene como motivación un *"DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON OCASIÓN DE LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA A LA CIUDAD DE PEREIRA"*, quien no solamente iba a cumplir la actividad a la que se hace referencia en la investigación, sino que asistiría al *"Conversatorio de Seguridad Regional (Quindío y Risaralda)"* en el centro de convenciones Expofuturo, actividades de bienestar con la tropa en el Batallón San Mateo y transmisión de mensajes en medios de comunicación locales de la ciudad de Pereira."⁷².

Por lo anterior, en todo caso, existía la obligación de prestar la debida seguridad en su desplazamiento al señor Ministro de Defensa, -para lo cual siempre ha de elaborarse la correspondiente orden de servicios- sobre quien también se llegó a pregonar por el instructor que la actuación de los investigados *"llevó al error al Ministerio de la Defensa Nacional de la época."*⁷³, indicando en otros apartes que *"se dio el*

⁷¹ Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

⁷² Cuaderno copia No. 2 folio 218 y 219.

⁷³ Cuaderno copia No. 12 folio 2313.

engaño a la sociedad civil y a sus superiores incluido el señor Ministro de la Defensa Nacional Dr. DIEGO MOLANO APONTE (...) "⁷⁴, lo que obviamente no puede tenerse como fundamento de un indicio grave de responsabilidad en contra de los investigados.

Cosa diferente es, como no lo esclarece el operador judicial primario, que a la sombra de la actividad que desarrollaría la Inspección 15 de Policía, se hubiese aprovechado para hacer ver y creer al Ministro de Defensa y a los medios de comunicación, que el derribamiento del inmueble obedecía exclusivamente por ser un bien detectado como mito de inseguridad por el comprobado expendio y/o consumo de estupefacientes y no por ser un bien que amenaza ruina.

De igual manera, se observa con preocupación por la Sala, que por parte del funcionario judicial, y sin ningún esfuerzo argumentativo, se dedica a copiar y pegar el razonamiento que realiza de la conducta de un procesado a otro, desconociendo lo individual de la responsabilidad penal, sin hacer distinción puntual a la actuación de cada investigado, pues se vale del precario análisis que hace al primero de ellos para a partir de allí repetir los argumentos, lo que no permite determinar con precisión su grado de compromiso penal en cada hecho punible hasta este momento procesal; contrariando con ello lo consignado por este al inicio de sus consideraciones al indicar

⁷⁴ Cuaderno copia No. 12 folio 2413.

que "De tal suerte y para el caso bajo estudio, bajo el moderno modelo dogmático de derecho penal debe tenerse presente, que el derecho penal lo que busca es individualizar la responsabilidad por conducta que afecten o pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por el legislador, lo que se efectúa a partir del análisis del contenido de la voluntad inherente al obrar humano."⁷⁵.

Lo anterior motivó a que por la señora representante del Ministerio Público se llamara la atención en su concepto al manifestar que:

"una situación evidente: a lo largo del proveído se copian, diríase, casi que literal, los argumentos esbozados en torno a los delitos del fraude procesal, falsedad ideológica de documento público y abuso de autoridad. En principio, podría decirse que como se trata de los mismos punibles, vale reiterar la misma sustentación, pero, debe tenerse en cuenta que es diferente la participación, por ejemplo, del señor coronel **CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ** y el señor Mayor **CESAR ALFOSO BOHÓRQUEZ SALCEDO**, no obstante que a los dos se les endilgue haber adulterado el video que soportó la demolición del inmueble que fue presentado como una olla de drogas (...)." ⁷⁶

En punto al punible contra la fe pública, se predica por el funcionario de primer grado que mismo estuvo dirigido a que "dicha casa contara con la aprobación para un derribamiento por microtráfico (...) en el hecho de que la vivienda efectivamente reuniera los requisitos y condiciones exigidas para tal procedimiento."⁷⁷, cuando

⁷⁵ Cuaderno copia No. 12 folio 2276.

⁷⁶ Cuaderno copia No. 16 folio 3112.

⁷⁷ Cuaderno copia No. 12 folio 2348.

se encontraba acreditado, como se reseñó en precedencia, que la demolición ya estaba ordenada, por un motivo diverso.

De igual forma, ha de llamarse la atención respecto a la total falta de motivación del indicio pregonado en contra del CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, el cual lo funda en el hecho que el mismo "se desprende de todo el plenario probatorio que se despliega en la presente investigación ya que todas son unívocas y coincidentes de que quien dio la orden de búsqueda al personal de la SIJIN, fue el señor Capitán Botero Sánchez."⁷⁸.

También, al momento de concretar la argumentación necesaria para soportar la necesidad y razonabilidad de la medida en contra del oficial en mención, éste no lo hace e incluso indica que. **se abstendrá de imponer la medida de aseguramiento** por considerar que, "en este delito no hay lugar a imponer medida de aseguramiento por cuanto no se cumple con el requisito objetivo del tiempo mínimo de pena, ya que en el caso especial de este delito el mínimo de la pena no supera los dos (2) años"⁷⁹ y con más asombro en la parte resolutive punto séptimo ordena, "Proferir Medida de Aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario, en contra del señor Capitán HECTOR JULIAN BOTERO SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 1.057.782.399, de condiciones personales y policiales conocidas en autos, por los presuntos delitos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA

⁷⁸ Cuaderno copia No. 12 folio 2354.

⁷⁹Folio 2355 C.C.12

*EN DOCUMENTO PÚBLICO, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este proveído*⁸⁰.

Como se puede apreciar, los argumentos del de Instructor en la resolución de situación jurídica no fueron congruentes a la hora de analizar la posibilidad de imponer o no medida de aseguramiento. Se atisba que por una parte, no realizó la construcción del indicio grave de responsabilidad como uno de los requisitos sustanciales que exige el artículo 522 de la Ley 522 de 1999 sobre la materia⁸¹, por otra parte concluye su fundamentación con la no imposición de la medida por cuanto consideró que el requisito objetivo de la pena no se cumplía.

De otro lado, se puede atisbar que probablemente debido a la copia que hizo el instructor de la decisión para todos los procesados, al oficial HÉCTOR BOTERO le imputa el injusto de EMPLEO ARBITRARIO DE LA FUERZA PÚBLICA⁸², y las fundamentaciones que utiliza en torno de este delito son las mismas que utilizó para los otros procesados por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO; esto dijo en su tesis "... es allí, donde efectivamente se vulnera el bien jurídico tutelado de la administración pública, y donde el abuso de las funciones va en contravía de personas que ante la sociedad gozaban de un buen nombre, prestigio y que con dicho acto arbitrario e

⁸⁰ Folio 2419 C.C. 13

⁸¹ Ley 522 de 1999, Art. 522 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y REQUISITOS SUSTANCIALES. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

⁸² Cuaderno copia No. 12 folio 2351

injusto, llevaron a que su buen nombre, como aspecto de protección constitucional, se dañara y fueran expuestos públicamente ante la sociedad..."⁸³. Los mismos argumentos expuso para el oficial GARCÍA SUÁREZ CARLOS al fundamentar el delito de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO⁸⁴; y para el MY CESAR ALFONSO BOHÓRQUEZ⁸⁵.

En el mismo sentido, frente al análisis hecho respecto del SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ sobre el cual a pesar de haberse indicado por el instructor que "para el despacho existe más de un indicio grave de responsabilidad en contra del investigado por el punible de OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, (...)..."⁸⁶, en el numeral DECIMOCUARTO de la parte resolutive le impone medida de aseguramiento, además del precitado punible, por "FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO"⁸⁷, misma de la cual había predicado su tipicidad al resolver su situación jurídica "al realizar manifestaciones en los documentos soportes de la demolición que no correspondían a la realidad fáctica.", tratándose a todas luces ello, de una presunta falsedad ideológica, pues no da cuenta de que por parte del procesado se hubiere falsificado un documento público que pudiera servir de prueba.

Pero hay más, entrando en contradicción de su propio argumento, al dar cuenta que se cumple con la descripción típica "al enviarlo desde su correo personal

⁸³ Cuaderno copia No. 12 folio 2352

⁸⁴ Cuaderno copia No. 12 folios 2288, 2289

⁸⁵ Cuaderno copia No. 12 folio 2319

⁸⁶ Cuaderno copia No. 13 folio 2402.

⁸⁷ Cuaderno copia No. 13 folio 2421.

institucional, el [sic] certifica la creación y elaboración del documento por el [sic] mismo."⁸⁸. De igual manera, a pesar de que del contexto se entiende que se trata de la elaboración de un documento público como lo es un mensaje de datos⁸⁹ contentivo de una verdad alterada, hace referencia posteriormente a un video⁹⁰, y si de lo que da cuenta es de una falsedad material que recayó o bien en un mensaje de datos o una grabación magnetofónica (video), no ha llegado a acreditar el peritaje que así lo señalara.

En punto al punible enrostrado en contra del citado mando ejecutivo, de "OCULTAMIENTO, ALTERACIÓN O DESTRUCCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO"⁹¹, hace la transcripción del tipo penal de falsedad material en documento público; y cuando hace referencia a la vulneración del bien jurídico tutelado en punto al delito de falsedad material en documento público, señala que se vulneró "de esta forma el bien jurídico tutelado como es la "Administración Pública""⁹², cuando la afectación recaería es sobre la fe pública.

De la misma forma señaló como "determinador" al CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, sin llegar a mencionar a quiénes determinó o porque consideró esa decisión, y como quiera que por los delitos que se le vinculó también lo fueron el CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ y al MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, se

⁸⁸ Cuaderno copia No. 12 folio 2398.

⁸⁹ Cuaderno copia No. 12 folio 2397.

⁹⁰ Cuaderno copia No. 12 folio 2399.

⁹¹ Cuaderno copia No. 13 folio 2401.

⁹² Cuaderno copia No. 13 folio 2413.

entendería que sería a estos a quienes determinó la comisión de los punibles bajo esta forma de participación, sin indicar el Despacho cómo es que un subalterno logró determinar a sus superiores en la comisión de varias conductas punibles; de igual forma, le dio el carácter de determinador al MY. WILMAR DELGADO HERRERA sobre el delito de prevaricato por omisión, cuando esta forma de participación no procedería para este tipo penal, y también, sin mencionarse por el despacho a quiénes determinó, y menos vincularlos a la investigación, irregularidad que se detecta igualmente respecto a los coprocesados TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ y el SI. RUBTER VEGA RAMÍREZ.

Es tan notoria la falta de atención en la elaboración de la decisión recurrida, que a pesar de que se está refiriendo a la procedencia de la medida de aseguramiento para el TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ, indica que *"Contra el presente procesado no obra solo indicio de responsabilidad, sino prueba testimonial y documental, pruebas que comprometen la responsabilidad penal del señor Mayor WILMAR DELGADO HERRERA como autor del delito imputado."*⁹³. dejando esa inconsistencia protuberante si se está refiriendo al oficial superior o al oficial subalterno.

Se evidencia más la falta de claridad del despacho de instrucción frente a los punibles enrostrados a los procesados, dado que encontrándose vinculado a la

⁹³ Cuaderno copia No. 12 folio 2381.

investigación el precitado oficial por el punible de falsedad ideológica en documento público, asegura en su providencia que está *"violando el bien jurídico como es la eficaz y recta impartición de justicia, (...)"*, añadiendo a renglón seguido que se está *"vulnerando de esta forma el bien jurídico tutelado como es la "Administración Pública" "*⁹⁴; irregularidad también detectada al pronunciarse frente al MY. WILMER DELGADO HERRERA, a quien procesó por el delito de prevaricato por omisión, y de quien afirma que su conducta vulneró *"el bien jurídico protegido como es la eficaz y recta impartición de justicia."*⁹⁵, consideración que se sale de toda lógica jurídica.

Respecto al debido proceso ha de entenderse desde dos perspectivas: una formal y otra material; la primera de ellas es un proceso rituado conforme a la ley, es decir, la sucesión de pasos estrictamente fijados en la norma, y que sólo el agotamiento de cada uno de ellos permite al final, que el funcionario judicial profiera su decisión. Desde el punto de vista material el debido proceso, es el método que permite efectivizar el derecho sustancial buscando armonía entre los derechos fundamentales del procesado y la facultad punitiva del Estado; por lo que, si no se construye el indicio, se desborda su potestad punitiva y se violentan los derechos del procesado.

De lo dicho anteriormente, el debido proceso contiene varias garantías penales y procesales entre otras, la

⁹⁴ Cuaderno copia No. 12 folio 2391.

⁹⁵ Cuaderno copia No. 12 folio 2370.

de allegar pruebas, respetar el principio de legalidad, el principio de la doble instancia, el del juez natural, el de las formas propias del juicio, etc., y en especial en el caso *sub judice*, el derecho de contradicción que resulta vulnerado ante una decisión interlocutoria que carece de una construcción dialéctica del indicio grave de responsabilidad y por ende resulta difícil de controvertir. Luego entonces, sin mayor esfuerzo se observa que en la decisión recurrida se vulnera el debido proceso por desconocimiento de la garantía de contradicción que tienen los sujetos procesales como consecuencia de la falta de motivación de la decisión, argumentación deficiente, ambigua o anfibológica.

También, se puede afirmar que el interlocutorio del 04 de abril de la presente anualidad no se pueden identificar las bases fácticas en que se sustenta la decisión, o peor aún, no se exponen las razones de orden probatorio, ni los fundamentos jurídicos en los que sustenta su decisión. Tales errores *in procedendo* implican su corrección por vía de la declatoria de nulidad en el entendido que se evidencia la vulneración al debido proceso por afectación a la garantía del derecho de contradicción, reflejado en que, si no hay claridad en la tesis de la decisión, difícil resulta para el apelante formular la antítesis en el recurso.

Finalmente, advertido el yerro de la falta de motivación en desarrollo del principio de taxatividad, se invoca la irregularidad consagrada en

el digesto castrense en su artículo 388 numeral 2° irregularidad que se reitera afecta de manera real y concreta el derecho de contradicción; incluso podría abordarse el derecho de defensa argumentando que para la corrección de esta vulneración no existe otro mecanismo procesal para remediarlo distinto a la nulidad, según los lineamientos del principio de trascendencia y de residualidad.

Consecuente con lo anterior, habrá de decretarse la nulidad del interlocutorio del 04 de abril hogaño, bajo el entendido que no se puede tener como resuelta la situación jurídica de los indagados al no haberse determinado fáctica y jurídicamente los presupuestos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad que conduzcan a identificar cuál es el indicio grave de responsabilidad que existe en contra del CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ; y SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ; ello, de cara a los punibles investigados, aclarándose que esta valoración requiere el convencimiento del juez frente a la verdad en un nivel de posibilidad y no de certeza.

No sobra advertir que las pruebas obrantes en las diligencias y practicadas posteriormente al auto recurrido, no resultan afectadas con la declaración de nulidad; corregido el yerro procesal, se habrá de continuar el trámite conforme a derecho.

8.4- Otras Consideraciones

Si bien es cierto que conforme a la decisión aquí adoptada, se entiende que la medida de aseguramiento impuesta a los investigados será revocada, ello no es óbice para llamar la atención del funcionario instructor, de cara a la manera en que invocando que en cabeza de aquellos concurrían dos de los fines establecidos en la norma penal para imponer en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, la impone con la misma incuria, como lo hizo cuando analizó el indicio grave de responsabilidad, puesto que se dedicó a copiar y pegar los mismos argumentos indistintamente para todos los procesados, considerando con ello cumplida su fundamentación, lo cual dista diametralmente de la exigencia legal requerida, como pasará a precisarse.

Invocando el requisito contenido en el artículo 308-1 de la Ley 906 de 2004 para imponer la medida de aseguramiento, ello es, "*Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.*", expuso el juzgado de instrucción para cada uno de los procesados, que comoquiera que "*la señorita Subteniente LUISA MORA, testigo dentro del proceso igualmente denunció ante la fiscalía General de la Nación una serie de hechos entre los cuales se encuentran la llegada de mensajes amenazantes e intimidantes de número de celulares desconocidos (...), se observa que en la denuncia que estas*

amenazas se relacionan con el hecho de haber capturado a seis integrantes de la Policía Nacional por este caso."⁹⁶

Continúa afirmando que "Por lo anterior, esta judicatura infiere que efectivamente los imputados bajo este tipo de maniobras están **induciendo** a los testigos obrantes y aquellos que puedan comparecer al proceso, a cambiar las versiones o realizar maniobras tendientes a realizar manifestaciones diferentes a las ya aportadas en el proceso."⁹⁷.

Lo anterior, sin contar con la más mínima evidencia de que sean los aquí procesados quienes estén amenazando o intimidando a la testigo como para aseverar que la medida de aseguramiento a imponer sea necesaria para evitar que aquellos obstruyan el ejercicio de la justicia.

De la misma suerte es la manifestación en punto a que estimó que se encontraba cumplido el fin contenido en el artículo 308-2 de la Ley 906 de 2004 consistente en "Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.", sustentado con el argumento que los procesados con su actuar pusieron "en peligro bienes jurídicamente tutelados de mayor entidad de las víctimas, ya que como está demostrado en el plenario, en su declaración el señor CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ GUERRERO, nieto de la propietaria del inmueble manifestó que de manera efectiva había sido amenazado por miembro [sic] del grupo delincuencia "la Cordillera"

⁹⁶ Cuaderno copia No. 13 folios 2298, 2329, 2365, 2386, C.C.12, y 2408.

⁹⁷ Ídem.

quienes tienen el monopolio efectivo de la venta de sustancias estupefacientes en el sector."⁹⁸.

Agregó a lo anterior que "De otra parte, resultan demostrado [sic] los sistemáticos hechos en la frecuencia de ocurrencia, teniendo en cuenta que en diligencia de versión libre e indagatoria rendida por el señor Mayor WILMAR DELGADO HERRERA, este manifiesta que esta conducta es de costumbre y como en todos los procedimientos de este tipo realizados en el marco del plan 1000. De tal manera, está acreditado [sic] las circunstancias que prueban el origen sistemático de los punibles; en consecuencia se infiere razonablemente la continuidad de la actividad delictiva; y por lo tanto representa que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la fuerza pública."⁹⁹.

Como acaba de verse, la presunta intimidación proviene no propiamente de los aquí investigados sino de grupos al margen de la ley; y de otra parte no se encuentra acreditado al interior del plenario que hechos similares a los aquí debatidos se hubieren cometido por los policiales comprometidos.

No puede pasar desapercibido por la Sala, un aspecto no menor que demanda la ilustración de esta Sala si es que el juez instructor lo desconoce, sobre la elaboración del interlocutorio mediante el cual se resuelve la situación jurídica, ello, dado que encontrándose ordenado por el artículo 334 del Código

⁹⁸ Cuaderno copia No. 12 folio 2300.

⁹⁹ Cuaderno copia No. 12 folio 2300 y 2301.

Penal Militar¹⁰⁰ que uno de los requisitos de la sentencia es que la parte resolutive de la misma estará precedida del enunciado "Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley", por parte del instructor se coloca dicha inscripción previo al "RESUELVE", cuando su decisión está lejos de ser una sentencia¹⁰¹.

Asimismo, se reitera para el conocimiento del instructor en punto a la aplicación de los aumentos de pena contenidos en la Ley 890 de 2004, que los mismos no han sido acogidos por esta jurisdicción especializada, específicamente para los procesos que se tramitan bajo las ritualidades de la Ley 522 de 1999, tema que ha sido decantado por esta Corporación conforme a lo expuesto por nuestro órgano de cierre bajo los siguientes argumentos:

"La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha concluido que como la razón de ser del aumento general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 fue habilitar los mecanismos de allanamientos y acuerdos que surgen de la implementación del denominado sistema penal acusatorio de la Ley 906 del mismo año, su aplicación queda supeditada a la vigencia gradual de éste.

(...)

Como viene de verse, es evidente que por voluntad del legislador, el incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación del sistema acusatorio (Ley 906 de 2004), de donde puede concluirse que en aquellos

¹⁰⁰ Ley 522 de 1999.

¹⁰¹ Cuaderno copia No. 13 folio 2418.

distritos judiciales en los cuales aún no se ha implementado el referido sistema procesal, no tiene aplicación el aumento de penas y por tanto, rigen los extremos punitivos establecidos en la Ley 599 de 2000.

Siendo ello así, como en efecto lo es, advierte la Sala que en el caso de estudio los falladores incurrieron en una vía de hecho, al aplicar al accionante el incremento de pena establecido en la Ley 890 de 2004, cuando en verdad, tal como lo señala, fue procesado de conformidad con los ritos establecidos en la Ley 600 de 2000, dado que en el distrito judicial donde curso la actuación en su contra aún no se había implementado el sistema acusatorio¹⁰².

Conforme a las anteriores consideraciones, se ordenará la libertad inmediata e incondicional de los procesados CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ; y SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ en razón de este proceso, siempre y cuando no sean requeridos por otra autoridad, tal y como se consignará en la parte resolutive de este proveído, para lo cual se comisionará al Director del Centro de Reclusión para Miembros de la Policía Nacional con sede en Facatativá (Cundinamarca), debiéndose librar la correspondiente boleta de libertad.

Sin más consideraciones jurídicas, la Primera Sala de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial,

¹⁰² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Radicado No. 26065 del 21-03-04, MP. Dr. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. Concordante con la Jurisprudencia del TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL, Radicado 156970 del 27 de julio de 2011. MP. CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA. Radicado 156212 del 28 de febrero de 2011. MP. MY. NORIS TOLOZA GONZÁLEZ, entre otras.

IX. RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD del interlocutorio adiado cuatro (4) de abril de 2023 proferido por el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar y Policial, mediante el que se resolvió la situación jurídica de los procesados CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ; y SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ; ello, conforme a lo esbozado en la parte motiva de este pronunciamiento.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **CONCEDER** la libertad inmediata e incondicional, a los procesados CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ, MY. CÉSAR ALFONSO BOHÓRQUEZ SALCEDO, MY. WILMAR DELGADO HERRERA, CT. HÉCTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, TE. JARRIXON PERALTA SÁNCHEZ; y SI. RUTBER VEGA RAMÍREZ; de acuerdo con los argumentos señalados en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: **COMISIONAR** con amplias facultades al Director del Centro de Reclusión para Miembros de la Policía Nacional con sede en Facatativá (Cundinamarca), para notificar de esta decisión personalmente a los procesados; y para hacer efectiva su libertad, conforme a la boleta de excarcelación que se librará a favor de los mismos, ello, siempre y cuando no sean requeridos por otra autoridad judicial en razón de otro proceso.

18 MAY 2023
FIRMA RESPONSABLE

159912-XVI-125-EJC
CR. CARLOS ANDRÉS GARCÍA SUÁREZ Y OTROS
FRAUDE PROCESAL Y OTROS

CUARTO: EJECUTORIADA esta decisión, devuélvase el proceso al Juzgado de origen para los fines pertinentes, una vez surtida la actuación a que haya lugar por parte de la Secretaría común de la Corporación.

QUINTO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Coronel JOSÉ ABRAHAM LÓPEZ PARADA
Magistrado Ponente

Coronel SANDRA PATRICIA BOTIA RAMOS
Magistrada
(Con incapacidad médica)

Coronel JORGE NELSON LÓPEZ GALEANO
Magistrado

BERLEDIS BANQUEZ HERAZO
Secretaria